OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017
MATERIAL ORIENTATIVO

El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas que se puedan plantear en la fase de oposición.

No supone, de ninguna de las maneras, un compromiso de efectuar los test sobre dichas preguntas.

La Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga "Patronato de Recaudación Provincial" no se responsabiliza de errores que puedan contener así como de las modificaciones normativas que puedan surgir.

Enero 2020

ÍNDICE

BLOQUE I

Tema 1. Los órganos administrativos. Competencia. Funcionamiento de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas. Los actos administrativos: requisitos. La eficacia de los actos administrativos. Notificaciones y publicaciones.

Tema 2. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Abstención y recusación. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Los interesados: Capacidad, legitimación y representación. Derechos del interesado en el procedimiento. Fases del procedimiento. Iniciación: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Ordenación. Términos y plazos. Instrucción: Intervención de los interesados, prueba e informes. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales.

Tema 3. Terminación del procedimiento: Formas de terminación. La obligación de resolver. La falta de resolución expresa. El régimen del silencio administrativo. La terminación convencional, resolución, desistimiento, renuncia y caducidad. Las especialidades del procedimiento administrativo común. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 4. La Administración electrónica y el funcionamiento electrónico del sector público. Principios. Sede electrónica. Canales y puntos de acceso. Identificación y autenticación. Firma electrónica. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Los servicios públicos electrónicos. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Registros y archivo electrónico. Comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos. Expediente y documento electrónicos. La simplificación y reducción de cargas administrativas en la tramitación electrónica en las Administraciones Públicas.

Tema 5. El personal funcionario de las Entidades Locales: Sistemas de selección y provisión. Situaciones administrativas.

Tema 6. El personal funcionario de las Entidades Locales: Derechos y deberes. Incompatibilidades: concepto y normas generales. La responsabilidad administrativa y el régimen disciplinario.

BLOQUE II

Tema 7. Ejecutoriedad. La ejecución forzosa: Medios de ejecución. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad y anulabilidad. La revisión de oficio. Concepto y clases de recursos administrativos. Principios generales.

Tema 8. La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 9. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Principios del procedimiento en materia de responsabilidad. Los presupuestos de la responsabilidad.

Indemnización. Inicio de oficio y a solicitud del interesado. Especialidades y competencia en la resolución de los procedimientos. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 10. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población municipal. El Padrón de habitantes. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Referencia a los órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Las competencias municipales: Propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de competencias.

Tema 11. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal. La coordinación en la prestación de determinados servicios por las Diputaciones Provinciales. Las competencias propias de las provincias en la Ley 5/2010, de 11 de junio.

Tema 12. Las relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones territoriales en la normativa estatal y autonómica. Deberes recíprocos entre Administraciones. Tutela y control de las Entidades Locales. Los convenios en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Tema 13. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones, actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de acuerdos. Resoluciones de la Presidencia de la Corporación. El registro de documentos. Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. La información y participación ciudadanas.

BLOQUE III

Tema 14. Los tributos. Concepto, fines y clases de tributos. La relación jurídico-tributaria: Concepto y elementos. Las obligaciones tributarias: La obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y las obligaciones tributarias formales. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria. Base imponible: Concepto y métodos de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. La deuda tributaria: Concepto.

Tema 15. Los obligados tributarios: Clases. Derechos y garantías. Los sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. Exenciones subjetivas. La capacidad de obrar en el orden tributario. Representación. Residencia y domicilio fiscal. La aplicación de los tributos.

Tema 16. Los procedimientos administrativos en materia tributaria: Fases. Obligación de resolver y plazos de resolución. La Prueba. Notificaciones. La denuncia pública. Potestades y funciones de comprobación e investigación. Las liquidaciones tributarias.

Tema 17. Extinción de la deuda tributaria. El pago o cumplimiento: Legitimación, momento, plazos, imputación y consignación. Medios y canales de pago. Otras formas de extinción: La prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia. Garantías de la deuda tributaria.

Tema 18. El procedimiento de recaudación en período voluntario: Iniciación y conclusión. Las entidades colaboradoras en la recaudación. Recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.

Tema 19. La recaudación en período ejecutivo. Inicio. Efectos. Recargos del periodo ejecutivo. Intereses de demora.

Tema 20. El procedimiento de apremio: Características, concurrencia y suspensión del procedimiento. La providencia de apremio: Concepto, motivos de impugnación, plazos de ingreso. Ejecución de garantías.

BLOQUE I

Tema 1. Los órganos administrativos. Competencia. Funcionamiento de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas. Los actos administrativos: Requisitos. La eficacia de los actos administrativos. Notificaciones y publicaciones.

1. La expresión "Administración Pública" hace referencia:

a. A un complejo de elementos personales y materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de división del trabajo.
b. A un complejo de elementos materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de especialidad y eficiencia.
c. A un complejo de elementos personales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de competencia y especialidad.
d. A un complejo de elementos personales y materiales ordenados que por designación política asume parte del total de las competencias que corresponden a la organización en su conjunto.

2. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos:

a. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros cuya actuación tenga carácter potestativo.
b. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
c. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones jurídicamente reguladas cuya actuación tenga carácter potestativo.
d. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones reguladas por la Ley 39/2015.

3. Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en individuales y colegiados hacemos referencia a lo siguiente:

a. Varias personas concurren en posición de igualdad y simultáneamente a la formación de la voluntad de un determinado órgano administrativo.
b. El número de titulares de que se compone un determinado órgano administrativo.
c. Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el órgano tiene atribuida.
d. Todas las opciones son válidas.

4. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. La determinación de su forma de integración en la Administración Pública concernida y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias y su dotación financiera.
b. La determinación de sus funciones y competencias, su régimen de funcionamiento y

su dotación financiera y de recursos personales.
c. La determinación de su situación jerárquica en la organización, la delimitación de sus funciones, la designación del titular responsable y su dotación financiera.
d. La determinación de las razones que justifican su creación, la planificación estratégica, su situación jerárquica en la organización y su dotación financiera.

5. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia es:

a. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
b. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.
c. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.
d. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.

6. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:

a. Instrucciones y órdenes de servicio.
b. Reglamentos internos.
c. Circulares.
d. Disposiciones de carácter general.

7. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia:

a. Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
b. Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
c. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
d. No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

8. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece:

a. Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
b. Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
c. Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el

funcionamiento de la organización representada.
d. Son correctas las dos primeras opciones.

9. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda:

a. Ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes.
b. Ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes.
c. Por delegación a sus órganos administrativos dependientes.
d. Ninguna es correcta.

10. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de avocación:

a. Podrá interponerse recurso de alzada.
b. Podrá interponerse recurso potestativo de reposición.
c. No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
d. Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión.

11. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados:

a. Se podrán convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia.
b. Se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.
c. Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse y celebrar sesiones tanto de forma presencial como a distancia.
d. Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia.

12. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia:

a. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de dos terceras partes, al menos, de sus miembros.
b. Presencial del Presidente o Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, al menos, de sus miembros.
c. Presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
d. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

13. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos colegiados tendrán un Secretario. De entre las siguientes opciones señale la que considere correcta:

a. Podrá ser un miembro del propio órgano.
b. Podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.
c. Podrá ser una persona ajena a la Administración Pública.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

14. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al Secretario:

a. Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado.
b. Certificar las actuaciones del órgano colegiado.
c. Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados.
d. Fijar el orden del día.

15. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa:

a. Cuando así lo decidan la mitad de sus miembros.
b. Cuando así lo decidan dos tercios de sus miembros.
c. Cuando así lo decidan tres quintos de sus miembros.
d. Cuando así lo decidan todos sus miembros.

16. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los órganos colegiados:

a. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios.
b. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
c. Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de los miembros presentes.
d. Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de sus miembros.

17. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados:

a. En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado.
b. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario.
c. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
d. En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado.

18. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas:

a. Ya sean de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
b. A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
c. De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
d. Bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

19. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos se ajustará:

a. A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico.
b. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley.
c. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
d. A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

20. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a. Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
b. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
c. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos.
d. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.

21. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse:

a. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
b. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.
c. Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración.
d. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

22. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:

a. Por escrito a través de medios electrónicos.
b. A través de medios electrónicos.
c. Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos.
d. Por escrito o verbalmente.

23. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria:

a. Son convalidables.
b. No son recurribles.
c. Son anulables.
d. Son nulas.

24. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:

a. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b. El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
c. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
d. La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

25. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas de carácter particular:

a. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general.
b. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
c. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.
d. No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.

26. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos:

a. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
b. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos nulos.
c. Como regla general, cuando se dicten en sustitución de actos nulos.
d. En ningún caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
27. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación:

a. Deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto

haya sido dictado.
b. Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c. Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d. Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

28. Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos serán objeto de publicación:

a. Cuando lo aconsejen razones de interés público legalmente previstas.
b. En cualquier caso.
c. A instancias del interesado.
d. Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

29. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones:

a. Se practicarán preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
b. Se practicarán preferentemente por correo certificado, excepto en los casos en que el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
c. Se practicarán por cualquier medio reconocido válidamente por el ordenamiento jurídico para producir los efectos legalmente previstos.
d. Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

30. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará:

a. Por medios electrónicos.
b. Por medios no electrónicos.
c. Por el medio señalado al efecto por la Administración.
d. Por el medio señalado al efecto por aquel.

Tema 2. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Abstención y recusación. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Los interesados: Capacidad, legitimación y representación. Derechos del interesado en el procedimiento. Fases del procedimiento. Iniciación: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Ordenación. Términos y plazos. Instrucción: Intervención de los interesados, prueba e informes. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales.

31. Entendemos por procedimiento administrativo:

a. Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la Administración Pública.
b. El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la Administración Pública.
c. La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico.
d. El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la aplicación de normas de índole procesal.

32. Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo es:

a. El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas.
b. La expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución.
c. El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
d. La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como reza el artículo 105 de la Constitución.

33. En relación al procedimiento administrativo común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece lo siguiente:

a. Sólo mediante Ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en dicha norma.
b. La Ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
c. La Ley contiene una regulación secuencial del procedimiento al modo en que se hace en las normas procesales, estableciendo los trámites concretos que han de seguirse para dictar actos administrativos.
d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

34. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común:

a. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido exclusivamente por la legislación estatal.
b. Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las especialidades de las mismas.
c. Son competencias exclusivas del Estado.
d. La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde la entrada de España en las Comunidades Europeas.

35. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes:

a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél.
b. Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
c. Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

36. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención tener con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento:

a. El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.
b. El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto.
c. El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del primero.
d. El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero.

37. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados:

a. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
b. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
c. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.
d. En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

38. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada:

a. En el plazo de tres días desde la presentación del escrito.
b. En el plazo de dos días desde la presentación del escrito.
c. En el mismo momento de la formulación de la recusación.
d. En el día siguiente a la presentación del escrito.

39. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

a. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
b. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
c. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que la Ley admita expresamente.
d. Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

40. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución sin mediar personación.
d. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales.

41. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición:

a. Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción.
b. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia.
c. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública.
d. El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

42. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante:

a. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
b. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado.

c. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en contra del interesado.
d. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite fehacientemente la revocación de sus poderes.

43. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a:

a. A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
b. El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo.
c. A no presentar en ningún caso documentos originales.
d. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.

44. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse:

a. Directamente de oficio por la misma Administración.
b. A petición de cualquier interesado.
c. A petición de quien acredite un interés legítimo.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

45. Según el artículo 57 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y resolver dicho procedimiento:

a. Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
b. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
c. Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
d. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

46. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del procedimiento se lleva a efecto en virtud de:

a. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia.
b. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de una orden del superior.
c. La denuncia de un particular.
d. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia, como consecuencia de

una orden superior o petición razonada de otro órgano administrativo o denuncia.

47. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del procedimiento de oficio se entiende por denuncia:

a. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
b. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.
c. La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
d. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

48. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo:

a. De veinte días.
b. De cinco días.
c. De diez días.
d. De tres días.

49. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales:

a. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días.
b. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días.
c. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días.
d. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días.

50. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites:

a. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe.
b. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.
c. A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia

y publicidad.
d. A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad.

51. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse:

a. En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
b. En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.
c. En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.
d. En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

52. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse:

a. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento.
b. Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a través de medios electrónicos.
c. Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento.
d. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios no electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento.

53. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

a. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
b. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales.
c. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones familiares y personales.
d. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones.

54. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:

a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
b. En todo momento del procedimiento.

c. En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación.
d. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

55. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión:

a. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común.
b. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
c. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
d. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

56. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo:

a. No superior a treinta días ni inferior a diez.
b. No superior a veinte días ni inferior a diez.
c. No superior a quince días ni inferior a diez.
d. No superior a treinta días ni inferior a veinte.

57. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en contrario, serán:
a. Facultativos y no vinculantes.
b. Preceptivos y no vinculantes.
c. Facultativos y vinculantes.
d. Preceptivos y vinculantes.

58. En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local:

a. No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico para las Entidades Locales, habida cuenta de que les resulta de aplicación la Ley 39/2015.
b. Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015.
c. Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
d. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los procedimientos administrativos de las Entidades Locales.

Tema 3. Terminación del procedimiento: Formas de terminación. La obligación de resolver. La falta de resolución expresa. El régimen del silencio administrativo. La terminación convencional, resolución, desistimiento, renuncia y caducidad. Las especialidades del procedimiento administrativo común. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

59. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento:

a. La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad.
b. La resolución, el desistimiento, la renuncia no prohibida, la imposibilidad sobrevenida y la declaración de caducidad.
c. La caducidad, la renuncia o el desistimiento.
d. La prescripción, la caducidad y la resolución motivada.

60. Los procedimientos sancionadores podrán finalizar:

a. Si el infractor reconoce su responsabilidad ante fedatario público.
b. En el caso de sanciones pecuniarias, si el presunto responsable paga voluntariamente antes de que se dicte resolución.
c. Si el infractor paga voluntariamente la sanción pecuniaria antes de la práctica de diligencias probatorias.
d. Si el infractor y el órgano competente acuerdan la reducción de la sanción antes de que se abra el plazo para dictar resolución.

61. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones pecuniarias pueden ascender:

a. Al 20% del importe de la sanción propuesta.
b. Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada.
c. Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente reglamentariamente dicho porcentaje.
d. Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas.

62. Los procedimientos administrativos, según el art. 86 de la Ley 39/2015, podrán finalizar mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos si respetan el ordenamiento y satisfacen el interés público:

a. Celebrados con personas y entidades de Derecho público.
b. Celebrados con entidades de Derecho público.
c. Celebrados con personas de Derecho público o privado.
d. Celebrados con entidades con personalidad jurídica y con el dictamen conforme del Consejo de Estado.

63. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la resolución:

a. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días.
b. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días.
c. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días.
d. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días.

64. La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015:

a. En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea.
b. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea.
c. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley.
d. En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea.

65. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos.

a. En un plazo máximo de tres meses cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo.
b. En un plazo máximo de seis meses cuando el procedimiento se inicie de oficio.
c. En un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte.
d. En el plazo máximo de cuatro meses si la terminación tiene lugar por pacto o convenio.

66. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla:

a. En los procedimientos iniciados de oficio.
b. En los procedimientos finalizados por pacto o convenio.
c. En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación.
d. No ha de dictar resolución en los casos de prescripción, renuncia o caducidad.

67. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a:

a. Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo.
b. La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo.
c. Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver.
d. La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la resolución del procedimiento.

68. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a

solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo:

a. Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE o el Derecho Internacional.
b. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal.
c. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE.
d. Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal.

69. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos desestimatorios:

a. En todos los supuestos salvo disposición legal contraria.
b. En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud de revisión de oficio.
c. En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos.
d. En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias.

70. La estimación por silencio administrativo:

a. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
b. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Administración.
c. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
d. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento desde que la Administración competente dicta resolución expresa posterior.

71. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá:

a. De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses siguientes a la expiración del plazo.
b. A instancia del interesado.
c. De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos quince días desde que expiró su plazo para resolver o a instancia del interesado en cualquier momento.
d. Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica.

72. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la seguridad jurídica de los administrados en:

a. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957.

b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c. La Ley 11/2007, de 22 de junio.
d. La Ley 4/1999, de 13 de enero.

73. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se reguló en:

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b. La Ley 4/1999, de 13 de enero.
c. Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos.
d. La Ley 11/2007, de 22 de junio.

74. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración:

a. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, el organismo competente volverá a iniciar el expediente.
b. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, se entenderán desestimadas las pretensiones del interesado que persiguieren situaciones jurídicas favorables por silencio administrativo.
c. La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, ha de dictar resolución y notificarla fehacientemente al interesado.
d. La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver siempre que lo notifique al interesado.

75. Según el art. 88 de la Ley 39/2015, en relación a la resolución que ponga fin al procedimiento:

a. Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados en los procedimientos iniciados por estos.
b. Las resoluciones serán motivadas en todos los casos.
c. La Administración podrá declinar la resolución por ausencia de regulación a las cuestiones planteadas en el procedimiento.
d. Podrán expresar los recursos que caben contra la misma.

76. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados:

a. Deberá indicar el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y la valoración de la prueba practicada.
b. Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su calificación, la persona responsable y la sanción propuesta.
c. Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado.
d. Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.

77. En los procedimientos iniciados de oficio:
a. La Administración no podrá desistir sin resolver previamente el expediente.
b. La Administración podrá desistir sin necesidad de motivar su actuación.
c. Los interesados podrán desistir o renunciar a sus derechos por cualquier medio que acredite su constancia y con las firmas correspondientes según normativa aplicable.
d. Los interesados podrán desistir mediante comparecencia personal ante el órgano encargado de instruir el expediente.

78. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece:

a. En las cuestiones que afecten al interés general o aquellas cuya sustanciación fuese conveniente, la caducidad podrá no ser aplicada por la Administración.
b. La caducidad se aplicará a la paralización del procedimiento por los interesados que lo iniciaron por causas imputables a estos en todos los casos.
c. Podrá acordarse la caducidad por inactividad del interesado en la cumplimentación de cualquier trámite pertinente en el procedimiento.
d. Los actos y trámites utilizados en un procedimiento en el que se haya producido su caducidad no podrán ser incorporados a otro procedimiento.

79. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que:

a. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició.
b. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició.
c. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa advertencia de la Administración pertinente.
d. Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno.

80. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse:

a. Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado.
b. De oficio por razones de orden público o interés general.
c. A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial.
d. No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios.

81. En el caso de que se acuerde la tramitación simplificada, los procedimientos administrativos deberán ser resueltos:

a. En un plazo de quince días.
b. En un plazo de cuarenta días.
c. En un plazo de treinta días en las Administraciones Central y Autonómica y de quince

días en el caso de la Administración Local.
d. En un plazo de treinta días desde que se acuerde, a menos que restase menos para su tramitación ordinaria.

82. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes:

a. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes preceptivos y resolución.
b. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución.
c. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes y dictámenes preceptivos y resolución.
d. Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución.

83. En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, podrá solicitar:

a. Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción del expediente.
b. Que el dictamen se emita en el plazo de quince días.
c. Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia.
d. Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se adjunta en el expediente remitido.

84. El artículo 61 de la Ley 39/2015 permite a un órgano administrativo el inicio de procedimientos por petición razonada de otros. Podemos afirmar que:

a. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de inspección del órgano solicitante.
b. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de investigación del órgano solicitante.
c. El órgano competente, si recibida la petición decide no iniciar el procedimiento, habrá de dictar resolución motivada.
d. El órgano competente, si recibida la petición, decide no iniciar el procedimiento habrá de comunicar al peticionario los motivos por los que no procede el inicio del procedimiento.

85. En el caso de ser preceptivo dictamen en el procedimiento administrativo simplificado:

a. El procedimiento se suspenderá por el plazo necesario para resolver.
b. El dictamen conforme a la propuesta de resolución pone fin al procedimiento.
c. Se seguirá la tramitación por el procedimiento ordinario si el dictamen se aparta de la propuesta de resolución del órgano competente.
d. El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento.

86. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos:
a. A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución.
b. A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este mismo método en cualquier momento del procedimiento.
c. A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses.
d. A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes que le afecten.

87. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser adoptadas:

a. De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias.
b. De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias y proporcionadas.
c. De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias.
d. De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano competente.

88. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto:

a. Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia iniciativa del órgano competente.
b. Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de otros.
c. Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en caso de infracción legal flagrante.
d. Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano administrativo o por propia iniciativa del competente.

Tema 4. La administración electrónica y el funcionamiento electrónico del sector público. Principios. Sede electrónica. Canales y puntos de acceso. Identificación y autenticación. Firma electrónica. El acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. Los servicios públicos electrónicos. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Registros y archivo electrónico. Comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos. Expediente y documento electrónicos. La simplificación y reducción de cargas administrativas en la tramitación electrónica en las Administraciones Públicas.

89. La primera norma que se refiere al impulso del empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias, fue:

a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
b. El artículo 9.3 de la Constitución.
c. La Ley 30/1992, de 29 de noviembre.
d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

90. La normativa derogada por las Leyes 39 y 40/2015, en relación a los medios electrónicos:

a. Promocionaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios técnicos o electrónicos cuando fuese compatible con los medios técnicos de que aquellas dispusieren.
b. No facilitaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios técnicos o electrónicos.
c. Únicamente permitía el uso de medios electrónicos a los profesionales en el ámbito de la contratación con el sector público.
d. Permitía a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los medios técnicos de que dispusieran.

91. Según la Exposición de motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos se impulsó con:

a. La Ley 24/2001 de 27 de diciembre.
b. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
c. La Ley 6/1997, de 14 de abril.
d. La Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

92. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

a. Imponía a los ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
b. Dejaba en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos podían

de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas.
c. Imponía a determinadas categorías de ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
d. Imponía a determinadas Administraciones Públicas relacionarse por medios electrónicos con los ciudadanos.

93. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos se estableció en:

a. La Ley 11/2007, de 22 de junio.
b. La Ley 56/2007, de 28 de diciembre.
c. La Ley 49/2007, de 26 de diciembre.
d. Ley 37/2007, de 16 de noviembre.

94. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público:

a. Complementa al Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías.
b. Transpone la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.
c. Complementa la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

95. Tras la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos:

a. Está derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016.
b. Están en vigor únicamente las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, hasta el 2 de octubre de 2020, estando el resto derogado.
c. Está en vigor en lo que no contravenga las disposiciones de la legislación de 2015.
d. Ha sido incorporada en su totalidad a la Ley 40/2015.

96. La base que sustenta la creación de oficinas virtuales y sedes electrónicas en la Administración Pública es:

a. El principio de transparencia de la Administración que proclama el artículo 9 de la Constitución.
b. El principio de eficiencia que desarrollaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c. El derecho a una buena administración que ha consagrado el ordenamiento de la Unión Europea.
d. El principio de eficacia de la Administración que proclama el artículo 103 de la Constitución.

97. En el ámbito europeo, las obligaciones para los Estados miembros de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos se estableció en:

a. La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre.
b. La Decisión 99/1720, de 12 de julio de 1999.
c. La Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999.
d. Ninguna es correcta.

98. La obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos se establece en:

a. En el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b. En el artículo 1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
c. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
d. En el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

99. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los medios electrónicos utilizados por las Administraciones Públicas:

a. Potenciarán la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua entre los diferentes organismos administrativos.
b. Han de garantizar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos en los procedimientos incoados por medios electrónicos.
c. Han de asegurar la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas.
d. Han de garantizar la protección de los datos de carácter personal, y la prestación conjunta de servicios a los interesados.

100. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, la sede electrónica es:

a. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública,
b. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
c. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, que informa a los ciudadanos sobre la actividad de una Administración Pública.
d. Aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de Internet a la información.

101. En relación al Punto de Acceso General de la Administración General del Estado:

a. Está regulado por Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre.
b. El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) facilita la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas al ser la puerta de entrada vía Internet a los servicios públicos.
c. Ha sido sustituido por el Portal de Transparencia.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

102. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado:

a. Depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b. Depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
c. Depende del Ministerio de la Presidencia.
d. Depende del Ministerio de Fomento e Innovación.

103. Según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 40, en relación a los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas:

a. Las Administraciones Públicas tendrán que identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
b. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas contendrán exclusivamente el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente.
c. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
d. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas explicitarán la identidad de la persona titular del órgano administrativo.

104. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por actuación administrativa automatizada:

a. Cualquier acto o actuación realizada en su mayor parte a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo con la intervención mínima del personal al servicio de la Administración.
b. Cualquier acto de tramitación y comunicación con los administrados realizado en su mayor parte a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo.
c. Cualquier acto de notificación a los administrados realizado exclusivamente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo.
d. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

105. La firma electrónica fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por:

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b. El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre.
c. La Ley 11/2007, de 22 de junio.
d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

106. La firma electrónica actualmente se regula en:

a. La Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
c. La Ley 11/2007, de 22 de junio.
d. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

107. En el ámbito de la Unión Europea, en relación a la identificación electrónica y las transacciones electrónicas en el mercado interior, está vigente la regulación contenida en:

a. La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999.
b. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1984 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, por la que se definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación.
c. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014.
d. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/296 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015.

108. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se practicarán:

a. Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
b. Mediante comparecencia en la sede de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección habilitada.
c. Mediante formas de notificación complementarias a través de los medios de difusión, en cumplimiento de la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
d. Preferentemente en el domicilio del interesado o en el que haya sido expresamente elegido por este.

109. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones:
a. Para determinados procedimientos que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
b. Para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

c. Para determinados procedimientos que afecten a obligaciones financieras de los interesados o les impongan sanciones pecuniarias.
d. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar.

110. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará:

a. Por medios electrónicos.
b. Por medios no electrónicos.
c. Por el medio señalado al efecto por aquel.
d. Por el medio señalado al efecto por la Administración.

111. De entre los siguientes colectivos no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración en virtud de lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

a. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.
b. Los trabajadores por cuenta propia.
c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.
d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

112. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y a la dirección de correo electrónico que el interesado haya facilitado, o a ambos, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única:

a. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
b. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
c. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
d. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

113. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:

a. Una vez transcurridas 24 horas tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación.

b. A los 10 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación.
c. A los 5 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación.
d. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

114. En relación a los registros y archivos electrónicos:

a. Se regulan en los artículos 16 y 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.
c. Los documentos electrónicos podrán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los mismos.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

115. El funcionamiento electrónico del sector público que regula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en:

a. La Ley 11/2007, de 22 de junio.
b. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
c. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

116. Se entiende por documento electrónico:

a. La información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
b. El conjunto de componentes electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo.
c. Las copias de papel auténticas de documentos públicos administrativos que están en poder de la Administración en ejercicio de sus competencias.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

117. Entendemos por carga administrativa:

a. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para solicitar determinadas prestaciones de la Administración previstas por el ordenamiento jurídico.
b. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa.
c. Aquellas contraprestaciones onerosas que ha de asumir el interesado para obtener determinados servicios de naturaleza administrativa.
d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

118. Se puede considerar una reducción de cargas administrativas:

a. La eliminación de obligaciones innecesarias, no requerir documentos o datos que obren en poder de las Administraciones.
b. Reducir la frecuencia de petición de datos y los plazos de tramitación de los procedimientos.
c. Posibilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos.
d. Todas las opciones son correctas.

Tema 5. El personal funcionario de las Entidades Locales: Sistemas de selección y provisión. Situaciones administrativas.

119. Son funcionarios de la Administración Local:

a. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios retribuidos, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo.
b. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo.
c. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales, regulada total o parcialmente por el Derecho Administrativo.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

120. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La selección de personal se realizará:

a. De acuerdo con la oferta de empleo público en el caso de los funcionarios.
b. De acuerdo con la oferta de empleo público tanto en el caso de los funcionarios como en el del personal laboral.
c. Mediante convocatoria pública en el caso de los funcionarios.
d. Mediante contratación directa en el caso del personal laboral.

121. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público a través:

a. Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre.
b. Del sistema de concurso-oposición o concurso.
c. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre.
d. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre designación.

122. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el sistema de selección de funcionarios en las Entidades Locales habrá de garantizar los principios constitucionales de:

a. Igualdad, mérito y capacidad.
b. Capacidad, productividad e igualdad.
c. Igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
d. Cualificación, mérito y capacidad.

123. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen:

a. En lo no dispuesto en esa Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b. Estarán igualmente sujetos a la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18ª de la Constitución.
c. En lo no dispuesto en dicha Ley, por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

124. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados:

a. Por personal funcionario o por personal laboral.
b. Con carácter general por personal funcionario.
c. Por personal eventual y personal funcionario.
d. Por personal funcionario y por personal laboral de libre designación.

125. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales:

a. Corresponde al personal funcionario y al personal laboral de libre designación.
b. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local.
c. Corresponde al personal funcionario y excepcionalmente al personal laboral de libre designación.
d. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local.

126. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera:

a. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia.
b. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función.
c. Las que se lleven a efecto en un proceso esencialmente electrónico en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función.
d. Ninguna es correcta.

127. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional:

a. La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
c. La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las competencias propias de la Corporación Local.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

128. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, su régimen disciplinario y situaciones administrativas serán reguladas por:

a. El Ministerio de la Presidencia, mediante orden.
b. El Ministerio de la Función Pública, mediante orden.
c. El Ministerio de Política Territorial, mediante decreto.
d. El Gobierno, mediante real decreto.

129. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde:

a. A la Corporación interesada previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b. Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
c. Al Estado, a través del Ministerio de la Función Pública.
d. A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

130. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional:

a. El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de carácter estatal el sistema normal de provisión.
b. El Ministerio de la Función Pública la regulará mediante decreto, siendo el concurso el sistema exclusivo de provisión.
c. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la regulará mediante orden, siendo el concurso-oposición el sistema preestablecido para la provisión.
d. El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios la regulará, siendo el concurso libre el modo de provisión habitual.

131. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación:

a. Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes.
b. Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

c. En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la Comunidad Autónoma competente.
d. En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda.

132. Las situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, se regulan originariamente en:

a. En el Real Decreto 730/1986, de 11 de abril.
b. En el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
c. En el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.
d. En el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

133. La declaración de situaciones administrativas de funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponderá:

a. Al Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda.
b. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública, salvo la de suspensión de funciones.
c. Al Ministerio de la Función Pública.
d. Al Ministerio de la Presidencia.

134. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario de las Entidades Locales, no se encuentra:

a. El servicio activo o servicios especiales.
b. El servicio en Comunidades Autónomas.
c. La comisión de servicios.
d. La expectativa de destino.

135. En virtud de lo establecido en el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no es un requisito necesario para ser admitido a las pruebas para el acceso a la función pública local:

a. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
b. Tener la nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los casos legalmente previstos.
c. Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d. Poseer la titulación exigida.

136. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario de las Entidades Locales, no se encuentra:

a. La excedencia voluntaria por prestación de servicio militar o servicio social sustitutorio.
b. La excedencia voluntaria por interés particular.

c. La excedencia voluntaria por agrupación familiar.
d. La suspensión de funciones.

137. No se considerará en situación de servicio activo a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que:

a. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
b. Hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional ingresando en cualquiera de sus subescalas y no hubieran obtenido aún su primer nombramiento.
c. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en Entidades Locales.
d. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las ciudades de Ceuta y Melilla.

138. Corresponderán las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera:

a. A los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
b. Al personal eventual que desempeñe puestos de confianza o de asesoramiento especial.
c. Al personal técnico-directivo específicamente habilitado al efecto.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

139. Los funcionarios de carrera de la Administración Local se dividen en:

a. Funcionarios que prestan servicios de carácter transitorio y funcionarios que gocen del derecho de reserva de plaza y destino.
b. Funcionarios técnicos, personal directivo y de libre designación.
c. Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios de la propia Corporación.
d. Funcionarios que prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, que en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

140. El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos en las Entidades Locales corresponde:

a. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia.
b. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas.
c. Al Ministerio de Administraciones Públicas.
d. A los órganos de la Corporación Local.

141. Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local corresponde:

a. Al Ministerio de Administraciones Públicas.
b. A los órganos de la Corporación Local.

c. A las Diputaciones Provinciales.
d. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas o de Administración Territorial en su caso.

142. La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde:

a. Al Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma.
b. A la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
c. Al Pleno de la Corporación.
d. Al Ministerio de Administraciones Públicas.

143. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos, para el acceso a la función pública en la Administración Local corresponderá:

a. Al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal.
b. Al Secretario de Estado para la Función Pública.
c. Al Secretario de la Corporación Local.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

144. Según el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección, formación y habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde:

a. A la Secretaría Técnica del Ministerio de Administración Territorial.
b. Al Instituto Nacional de Administración Pública.
c. Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente.
d. Al Centro de Formación de la Dirección General de la Función Pública.

145. La selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo, según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia:

a. Del Alcalde o Presidente, o del miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal.
b. Del Secretario de Estado para la Función Pública.
c. De cada Corporación local.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

146. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando un funcionario de carrera sea adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional será declarado en la situación administrativa de:

a. Excedencia forzosa.

b. Excedencia voluntaria.
c. Servicios especiales.
d. Servicio en otras Administraciones Públicas.

147. Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo:

a. De cinco años inmediatamente anteriores.
b. De cinco años.
c. De cuatro años.
d. De dos años inmediatamente anteriores.

148. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a:

a. Computar el tiempo en dicha situación a efectos de trienios pero no de promoción interna.
b. Reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados.
c. Percibir las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera.
d. La reserva del puesto de trabajo.

Tema 6. El personal funcionario de las Entidades Locales: Derechos y deberes. Incompatibilidades: concepto y normas generales. La responsabilidad administrativa y el régimen disciplinario.

149. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen:

a. Por las disposiciones de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y supletoriamente por la Ley 7/2007.
b. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
c. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/1985.
d. Por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

150. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los puestos de trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por:

a. Funcionarios de carrera exclusivamente.
b. Exclusivamente por personal funcionario.
c. Exclusivamente por funcionarios de carrera y por personal técnico de libre designación.
d. Personal funcionario con carácter general.

151. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales:

a. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local.
b. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera habilitados al servicio de la Administración Local.
c. Corresponde, en la medida de lo posible, a los funcionarios de carrera y altos cargos habilitados al servicio de la Administración Local.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

152. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las retribuciones básicas de los funcionarios locales:

a. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso.
b. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso, con las modificaciones establecidas como complementos autonómicos.
c. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública.
d. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública salvo los complementos de destino.

153. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:

a. Básicas y complementarias.
b. Básicas y suplementos.
c. Salario base y complementos en especie.
d. Básicas, complementarias e indemnizaciones.

154. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones básicas de los funcionarios:

a. Las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
b. Las fija cada Administración para su ámbito de competencia.
c. Las fija cada Administración Pública según el sistema de baremación reglamentariamente aprobado.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

155. El Estatuto Básico del Empleado Público recoge por primera vez en nuestra legislación:

a. La creación de la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas.
b. Una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos.
c. El derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
d. Todas son correctas.

156. En relación a los derechos de los empleados públicos, el Estatuto en su redacción de 2015 actualiza ese catálogo, incorporando a los más tradicionales otros de reciente reconocimiento:

a. Es el caso de los derechos relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluación.
b. El derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical.
c. Se consagra el derecho a la promoción interna de todos los empleados que adquieran las competencias legalmente establecidas.
d. El derecho a consolidar las retribuciones complementarias como parte de la masa salarial.

157. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación a la evaluación del desempeño de los empleados públicos, se establece que las Administraciones Públicas deberán llevarla a efecto:

a. A través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad, no discriminación y transparencia.
b. En virtud de procedimientos fundados en los principios de mérito, capacidad y objetividad.
c. A través de procedimientos fundados en los principios de eficacia, transparencia e

igualdad.
d. En virtud de procedimientos fundados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

158. La evaluación del desempeño de los empleados públicos deberá tenerse en cuenta:

a. En la carrera profesional horizontal.
b. En la provisión de puestos de trabajo.
c. En la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del Estatuto.
d. Las tres opciones son correctas.

159. Se entiende por incompatibilidad en la esfera de la función pública:

a. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado.
b. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público.
c. La imposibilidad de conciliar las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

160. No se considera actividad en el sector público:

a. La desarrollada por los miembros electivos de las cámaras representativas estatales, autonómicas o locales.
b. La desarrollada por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes.
c. La desarrollada por las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.
d. La desarrollada por los dirigentes y altos cargos de partidos políticos y sindicatos u organizaciones empresariales representativas legalmente constituidos.

161. Salvo en los supuestos previstos en la ley, no se podrá percibir más de una remuneración:

a. Con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los Órganos Constitucionales.
b. Que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles.
c. Que implique cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su

devengo periódico u ocasional.
d. Todas las opciones son correctas.

162. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con:

a. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
b. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
c. El ejercicio de cualquier profesión o actividad privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

163. La regulación de las incompatibilidades de los empleados públicos se contiene en:

a. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
b. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c. El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.
d. La Ley 40/2015, de 1 de octubre.

164. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el ejercicio de una segunda actividad en el sector privado de un funcionario:

a. Requiere previa autorización de compatibilidad.
b. Está exenta del régimen de incompatibilidades.
c. Requiere previo reconocimiento de compatibilidad.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

165. Según el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes:

a. Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.
b. Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
c. Miembros del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

166. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el personal comprendido

dentro del ámbito de aplicación de la Ley, sólo podrá desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma, y en los supuestos que se determine:

a. Por el Consejo de Ministros.
b. Por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma.
c. Por el Consejo General del Poder Judicial.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

167. El procedimiento para obtener la compatibilidad con actividad privada compete:

a. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
b. A la Oficina de Conflictos de Intereses.
c. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha delegado en la Oficina de Conflictos de Intereses.
d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

168. Según el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se exceptúan de la prohibición general de la Ley:

a. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
b. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo completo y con duración determinada.
c. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida.
d. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario honorario en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida.

169. El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en:

a. El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b. En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.
c. En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
d. El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter supletorio respecto al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

170. En virtud del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al funcionario declarado en la situación de suspensión, quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma:

a. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición.
b. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de diez meses.
c. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición salvo

sus retribuciones básicas.
d. Del ejercicio de sus funciones durante un plazo máximo de doce meses.

171. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones:

a. De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos.
b. De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos y en caso de extralimitación en las mismas.
c. Del personal laboral e interino a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos.
d. De los funcionarios públicos y el personal laboral a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos.

172. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario:

a. No podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
b. No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
c. En ningún caso podrá exceder de 4 meses.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

173. El artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce que el procedimiento disciplinario deberá estructurarse atendiendo a los principios de:

a. Eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
b. Celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
c. Objetividad, eficacia y celeridad, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
d. Audiencia, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.

Tema 7. Ejecutoriedad. La ejecución forzosa: Medios de ejecución. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad y anulabilidad. La revisión de oficio. Concepto y clases de recursos administrativos. Principios generales.

174. El artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, consagra el principio de ejecutividad de los actos administrativos:

a. Los actos de las Administraciones Públicas serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
b. Los actos de la Administración General del Estado serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
c. Los actos de la Administración General del Estado una vez que alcancen firmeza serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
d. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esa Ley.

175. La posición de la Administración respecto a los Tribunales se explica:

a. Como un sistema de autotutela.
b. Está capacitada como sujeto de derecho para hacer valer sus derechos eximiéndose de este modo de la necesidad común a los demás sujetos de recabar una tutela judicial.
c. La Administración únicamente se somete a los dictados de la jurisdicción contencioso-administrativa.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

176. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:

a. Desde la fecha en que se dicten.
b. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
c. Desde la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
d. Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.

177. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la eficacia de los actos quedará demorada cuando:

a. Así lo exija una norma aplicable.
b. Así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
c. El acto sea susceptible de recurso.
d. Así lo estipulen las medidas cautelares que lo acompañan.

178. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación a la eficacia temporal de los actos administrativos:

a. Como regla general podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos.
b. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos.
c. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
d. En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

179. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos:

a. Siempre que dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración.
b. Aunque no tengan relación jerárquica entre sí y dependan de la misma Administración.
c. Siempre que dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
d. Aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

180. De la "presunción de legalidad" se extraen las siguientes consecuencias:

a. Los actos serán ejecutivos, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten.
b. Los administrados asumen la carga de recurrir, primero, a través de los recursos administrativos y, una vez agotada esta vía, ante los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo.
c. Ante la interposición de los recursos se acordará de oficio la suspensión del acto.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

181. En este sentido el artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que la Administración pública, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos:

a. Salvo en el supuesto que por órganos competentes se suspenda la ejecución.
b. Salvo en el supuesto que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención un órgano judicial.
c. Salvo en el supuesto que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Constitución.
d. Salvo en el supuesto que la suspensión del acto pueda causar perjuicio a los particulares interesados parte en el procedimiento.

182. Podemos considerar que un acto jurídico es inválido cuando:

a. No produce efectos por no haber sido notificado a su destinatario.
b. No produce efectos por no haber sido publicado.
c. No ha sido elaborado utilizando los soportes electrónicos legalmente previstos.
d. Está afectada la esencia misma del acto por estar viciado alguno de sus elementos.

183. Según la redacción del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seleccione la opción que no se corresponde con actos nulos de pleno derecho:
a. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
b. Los actos que limiten derechos subjetivos individuales.
c. Los actos que tengan un contenido imposible.
d. Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

184. Según la redacción del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seleccione la opción que no se corresponde con actos nulos de pleno derecho:

a. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
b. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
c. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
d. Cualquiera que se establezca como tal expresamente en una disposición con rango de ley o reglamentaria.

185. Según la redacción del artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a la anulabilidad el precepto establece que:

a. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.
b. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
c. La realización en cualquier caso de actuaciones administrativas fuera del plazo establecido para ello implica la anulabilidad.
d. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido son anulables.

186. Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando de una resolución administrativa nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará:

a. Obligatoriamente mediante transferencia o domiciliación bancarias.
b. Mediante transferencia o domiciliación bancarias según opte el obligado al pago.
c. Mediante transferencia bancaria, domiciliación bancaria o giro postal según opte el obligado al pago.
d. Preferentemente, utilizando tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria o domiciliación bancaria o cualesquiera que se autoricen por el órgano competente.

187. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará respetando siempre el principio de proporcionalidad. La Administración podrá optar por:

a. Apremio sobre el patrimonio, ejecución coercitiva, multa subsidiaria o compulsión sobre el patrimonio.
b. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el que pueda llevarse a efecto a cabo con mayor celeridad.
c. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el que decida el afectado.
d. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.

188. Según el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a:

a. Una ley.
b. Una norma reglamentaria.
c. Una norma de rango legal o reglamentaria.
d. Una norma de rango legal.

189. Según el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la multa coercitiva es:

a. Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas.
b. Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.
c. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas.
d. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

190. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas declararán la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1:

a. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
b. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
c. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
d. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad

Autónoma, si lo hubiere.

191. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con la revisión de disposiciones y actos nulos, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio:

a. El transcurro del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la nulidad automática del acto revisado.
b. El transcurro del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución permitirá la apertura de la vía jurisdiccional.
c. El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
d. El transcurro del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la responsabilidad de la Administración por inactividad.

192. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa declaración de lesividad para el interés público:

a. Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48.
b. Los actos desfavorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48.
c. Los actos favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48.
d. Los actos desfavorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48.

193. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de lesividad no podrá adoptarse:

a. Una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo.
b. Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo.
c. Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
d. Una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.

194. Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra las resoluciones y determinados actos de trámite, fundado en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, podrá interponerse por los interesados:

a. El recurso de alzada.
b. Los recursos de alzada y extraordinario de revisión.
c. Los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.
d. Los recursos de alzada y potestativo de reposición.

195. Según el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá:

a. El recurso extraordinario de revisión.
b. El recurso extraordinario de reposición.
c. El recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
d. El recurso de anulación.

196. Según el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones y actos cuando no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos:

a. En revisión ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
b. En alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
c. En alzada ante el mismo órgano que los dictó.
d. En reposición ante el órgano superior del que lo dictó.

197. El plazo para la interposición del recurso de alzada:

a. Será de un mes, si el acto fuera presunto.
b. Será de un año.
c. Si el acto no fuera expreso el plazo será de dos meses.
d. Será de un mes, si el acto fuera expreso.

198. En virtud de lo estipulado en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede afirmarse contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión:

a. Ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución.
b. Las causas que justifican el recurso son tasadas: únicamente procede por prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible.
c. El plazo para interponer el recurso es de cinco años, siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
d. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado.

199. Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso, respecto a la ejecución del acto impugnado:

a. Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso.
b. No suspenderá la ejecución del acto impugnado excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.
c. No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.
d. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Tema 8. La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

200. El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora:

a. Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015.
b. Ha sido sustancialmente modificado por las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015.
c. Ha sido derogado por la Ley 39/2015.
d. Ha sido incorporado en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015.

201. La potestad sancionadora puede definirse como:

a. Los poderes jurídicos que habilitan a la Administración Pública para desarrollar las actuaciones precisas, que inciden en la esfera de los administrados, a fin de satisfacer el interés general.
b. Las potestades administrativas, que se conceden para fines específicos previstos en el ordenamiento jurídico.
c. Aquella que permite a la Administración Pública imponer sanciones cuando se ha producido una infracción administrativa.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

202. La Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público introduce algunas novedades en relación con la potestad sancionadora:

a. La extensión de los principios de la potestad sancionadora al régimen disciplinario del personal de las administraciones públicas.
b. La fijación del inicio del cómputo para que se produzca la prescripción.
c. La graduación de las sanciones.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

203. El principio de legalidad impregna de manera muy especial el ejercicio de esta potestad; deriva:

a. Del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
b. Del artículo 25.1 de la Constitución.
c. De la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
d. Del artículo 9 de la Constitución.

204. El principio de irretroactividad exige para la imposición de una sanción la existencia de una ley previa; deriva:

a. Del artículo 24 de la Constitución.
b. Del artículo 14 de la Constitución.
c. Del artículo 9.3 de la Constitución.

d. Del artículo 25 de la Constitución.

205. La Administración no podrá imponer sanciones que:

a. Directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.
b. Directa o subsidiariamente impliquen privación de derechos para los administrados.
c. Directa o subsidiariamente impliquen privación de derechos civiles y políticos de los administrados.
d. Directa o subsidiariamente impliquen privación de derechos patrimoniales de los administrados.

206. En relación con los principios relacionados con la potestad sancionadora:

a. La aplicación de las garantías penales al procedimiento administrativo de imposición de sanciones sólo es posible en la medida que las mismas resulten compatibles con su naturaleza.
b. La aplicación de los principios penales a la potestad sancionadora de la Administración es automática.
c. La aplicación de las garantías penales al procedimiento administrativo de imposición de sanciones sólo es posible cuando se pone en funcionamiento la jurisdicción contencioso-administrativa.
d. La aplicación de las garantías penales al procedimiento administrativo de imposición de sanciones es excepcional.

207. El principio de legalidad significa que:

a. Por la ley formal ha de realizarse tanto la descripción de las infracciones administrativas, como las sanciones, siendo posible una pormenorización del procedimiento para su imposición en reglamentos administrativos.
b. Por la ley formal basta una descripción genérica de las infracciones administrativas, así como de las sanciones, siendo posible una pormenorización de las mismas mediante los reglamentos administrativos.
c. Por la ley formal basta una descripción genérica de las sanciones administrativas, que se pueden pormenorizar en un reglamento administrativo; pero se han de precisar las infracciones en el texto legal.
d. Por la ley formal basta una descripción genérica de las infracciones administrativas, que se pueden pormenorizar en un reglamento administrativo; pero se han de precisar las sanciones en el texto legal.

208. El principio de tipicidad deriva:

a. Del artículo 9 de la Constitución.
b. Del artículo 24 de la Constitución.
c. Del artículo 25 de la Constitución.
d. Del artículo 14 de la Constitución.

209. Se admite la aplicación retroactiva de las normas sancionadoras:

a. A hechos anteriores, cuando favorece al infractor.
b. A hechos anteriores tipificados como sanción.
c. A hechos anteriores no prescritos.
d. A hechos relativos a sanciones impuestas y cumplidas.

210. El principio de responsabilidad en relación con las infracciones administrativas alude a la voluntariedad o a la intencionalidad del responsable de los hechos constitutivos de la infracción se recoge:

a. En el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 6/2015.
b. En el artículo 28.1 de la Ley 40/2015.
c. En el artículo 29.3 de la Ley 40/2015.
d. En el artículo 32.2 de la Ley 30/1992.

211. El principio de proporcionalidad constituye un principio informador de toda la actividad administrativa, especialmente relevante en el ejercicio de la potestad sancionadora:

a. Si un determinado objetivo puede conseguirse con dos medidas debe escogerse la menos gravosa para el ciudadano.
b. Requiere la comparación entre la gravedad del ilícito administrativo con la gravedad de la sanción.
c. Si un determinado objetivo puede conseguirse con dos medidas debe escogerse la más eficaz para salvaguardar los intereses generales.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

212. Entre las especialidades del procedimiento sancionador destaca el principio de transparencia que se desarrollará:

a. De acuerdo con el principio de acceso permanente.
b. De acuerdo con el principio de interoperatibilidad.
c. De acuerdo con el principio de cooperación leal.
d. De acuerdo con el principio de audiencia.

213. El principio general del Derecho conocido como “non bis in ídem” supone que no recaiga duplicidad de sanciones, administrativa y penal, en los casos en que:

a. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto y hecho.
b. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto, hecho y fundamento.
c. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto y fundamento.
d. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto.

214. El principio de prescripción remite a la extinción de las infracciones y sanciones administrativas por el mero transcurso del tiempo. Estamos ante una manifestación del principio más general de:

a. Legalidad.
b. Interdicción de la arbitrariedad.
c. Seguridad jurídica.
d. Audiencia.

215. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y:

a. Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
b. Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
c. Siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
d. Siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

216. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento:

a. Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente.
b. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente.
c. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente.
d. Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente.

217. Según el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas:

a. Resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
b. Resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
c. No resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
d. No resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

218. Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las normas definidoras de:

a. Infracciones serán susceptibles de aplicación analógica.
b. Infracciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
c. Infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica.
d. Infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

219. Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, respecto a las sanciones:

a. En ningún caso podrán imponerse sanciones por la comisión de infracciones administrativas.
b. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
c. Podrán imponerse sanciones por la comisión de cualquier tipo de infracción previamente delimitadas por la Ley.
d. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones y sanciones específicas para conductas conexas.

220. Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por:

a. Una Ley.
b. Una norma con rango de ley.
c. Un reglamento.
d. Todas son correctas.

221. Según el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las disposiciones sancionadoras:

a. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición
b. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición
c. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
d. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

222. Según el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las disposiciones relativas a los principios de la potestad sancionadora:

a. Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
b. Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público.
c. Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
d. Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de fundaciones y organismos sin personalidad jurídica.

223. El Tribunal Supremo en sentencia de 10 de noviembre de 1998, en relación con las facultades del alcalde, señaló:

a. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local regula todas y cada una de las funciones de los alcaldes.
b. El Alcalde podía delegar la potestad sancionadora.
c. La potestad sancionadora no puede delegarse en ningún caso, ha de ejercerse por el órgano legalmente habilitado para ello.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

224. En virtud de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril:

a. Los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones.
b. Los entes locales podrán establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones en todos los ámbitos de sus competencias.
c. Los entes locales podrán establecer los tipos de las infracciones en todos los ámbitos de sus competencias.
d. Los entes locales podrán imponer sanciones en todos los ámbitos de sus competencias.

225. Se mantuvo hasta la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la prohibición de la delegación de firma en expedientes sancionadores:

a. Ahora no se permite la delegación de competencias sancionadoras en el ámbito local.
b. Ahora, no sólo se permite respecto de una competencia propia, sino también cuando la misma se haya producido por delegación.
c. Ahora se permite respecto de competencias recibidas por delegación.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

226. En relación con la potestad sancionadora en el ámbito local, en virtud de la exigencia de Ley en el ámbito local, tras diversas sentencias que propiciaban el ejercicio de la potestad sancionadora local, finalmente se contempla esta posibilidad en:

a. La Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Tema 9. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Principios del procedimiento en materia de responsabilidad. Los presupuestos de la responsabilidad. Indemnización. Inicio de oficio y a solicitud del interesado. Especialidades y competencia en la resolución de los procedimientos. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

227. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tiene su origen en:

a. El artículo 106 de la Constitución.
b. El artículo 9.3 de la Constitución.
c. En la Ley 30/1992, de 29 de noviembre.
d. En el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

228. La responsabilidad patrimonial se articula a partir de algunos postulados. Señale la opción incorrecta:

a. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos salvo caso de fuerza mayor.
b. La responsabilidad patrimonial de la Administración es una responsabilidad objetiva ya que supone que no es necesario que el daño a indemnizar sea realizado con culpa o ilegalidad.
c. Para que exista responsabilidad únicamente será necesario que el perjudicado no esté obligado por norma alguna a soportar el daño producido.
d. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes.

229. La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre los aspectos esenciales de la responsabilidad. Señale la opción incorrecta:

a. Que la lesión patrimonial sea consecuencia directa del funcionamiento anormal de la Administración Pública.
b. Los servicios públicos actúan en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c. Que el daño sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
d. La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

230. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el derecho a indemnización se deriva también:

a. De la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que los particulares no tengan el deber jurídico de soportar.

b. De la aplicación de actos jurídicos de naturaleza expropiatoria de derechos que no afecten directamente a los particulares.
c. De la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que los particulares no tengan el deber jurídico de soportar.
d. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas implica el derecho a la indemnización.

231. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que:

a. El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente.
b. El particular haya obtenido en primera instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
c. El particular haya obtenido en segunda instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
d. El particular alegase la inconstitucionalidad de la norma e interpusiera cuestión de inconstitucionalidad.

232. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea:

a. El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada.
b. La norma europea ha conferir derechos a los particulares, el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado y ha de existir una relación de causalidad directa con el incumplimiento de la Administración responsable.
c. El particular haya instado la interposición de la oportuna cuestión prejudicial ante la instancia europea.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

233. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea:

a. Producirá efectos desde su firmeza salvo que en la resolución judicial se establezca otra cosa.
b. Producirá efectos desde la fecha de notificación a los interesados, salvo que en ella se establezca otra cosa.
c. Producirá efectos desde la fecha de la notificación de su firmeza al recurrente, salvo que en ella se establezca otra cosa.

d. Producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

234. El importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad, lo fijará:

a. El Consejo de Ministros.
b. El Ministro de Justicia.
c. El Consejo General del Poder Judicial.
d. Ninguna es correcta.

235. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones ocasionadas por la declaración del Tribunal Constitucional a instancia de parte interesada, de la existencia de un funcionamiento anormal de la Administración, se tramitará:

a. Por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo General del Poder Judicial.
b. Por el Ministerio de la Presidencia, con audiencia al Consejo de Estado.
c. Por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
d. Por el Ministerio de Justicia, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

236. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes:

a. Responderán frente al particular mancomunadamente.
b. Responderán frente al particular según la relación jerárquica que mantengan entre ellas.
c. Responderán frente al particular coordinadamente.
d. Responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria.

237. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos de responsabilidad patrimonial por declaración de inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, serán indemnizables:

a. Los daños producidos en el plazo de los diez años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
b. Los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
c. Los daños producidos en el plazo de los tres años anteriores a la fecha de la publicación

de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
d. Los daños producidos desde la fecha de la publicación de la norma en cuestión, a no ser que la sentencia disponga otra cosa.

238. La cuantía de la indemnización, tal y como señala el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre se calculará:

a. Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad.
b. Se actualizará a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística.
c. Los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
d. Todas las opciones son correctas.

239. Según el artículo 36 de la Ley 40/2015, en cuanto a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas:

a. Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
b. El derecho a reclamar prescribirá a los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
c. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
d. La Administración concernida exigirá a instancia de parte, con carácter previo al desembolso de la indemnización, en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves.

240. Los requisitos del daño "indemnizable" son, tal y como establece el artículo 32 de la Ley 40/2015:

a. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
b. Efectivo, vencido e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
c. Exigible, líquido y evaluable económicamente con relación a una persona.
d. Se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de la sentencia.

241. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por:

a. La Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
c. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
d. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

242. Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, se seguirá el procedimiento previsto en:

a. La Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público.
c. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público.
d. La Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

243. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular en todo caso:

a. De forma subsidiaria.
b. De forma individual.
c. De forma mancomunada.
d. De forma solidaria.

244. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada:

a. Por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con menor participación en la financiación del servicio.
b. En los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con menor participación en la financiación del servicio.
c. En los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.
d. Por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.

245. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta de Administraciones concurrentes:

a. Podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones Públicas.
b. Deberá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones Públicas.
c. No podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas sin incoación de expediente previo.
d. La distribución de responsabilidades se establecerá en vía contencioso-administrativa.

246. En supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, sin que exista previo instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de:

a. Competencia.
b. Interés público tutelado.
c. Intensidad de la intervención.
d. Todas las opciones son correctas.

247. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que puedan exponer cuanto consideren procedente, en el plazo de:
a. 5 días.
b. 10 días.
c. 20 días.
d. 15 días.

248. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste:

a. No tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
b. Tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
c. Tenga o no el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
d. Ninguna opción es correcta.

249. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que:

a. Se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad de que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial o económica.
b. No se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad de que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial

o económica.
c. Se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de las técnicas existentes en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.
d. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

250. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, la indemnización de las lesiones producidas al particular se calculará:

a. Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal.
b. Ponderando, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
c. Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa y demás normas aplicables.
d. Todas las opciones son correctas.

251. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, en los casos de muerte o lesiones corporales:

a. Se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
b. Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
c. Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos utilizados por las Mutuas que colaboran con la Seguridad Social.
d. Se adoptará la baremación establecida en el preceptivo informe forense.

Tema 10. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población municipal. El Padrón de habitantes. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Referencia a los órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Las competencias municipales: Propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de competencias.

252. Podemos definir el municipio como:

a. La forma de organización política propia de los pueblos y ciudades de España.
b. Es una entidad de la Administración Local sin personalidad jurídica.
c. Es forma de organización anterior al Estado y, en consecuencia, éste ha de limitarse únicamente a reconocer su existencia.
d. Es un ente público menor, territorial y primario que existe independientemente de que el ordenamiento jurídico estatal lo reconozca o lo cree.

253. Entre las características del municipio destaca:

a. Como ente público menor, porque está subordinado al Estado, teniendo sus potestades carácter derivado.
b. Como ente público territorial en cuanto que el territorio es elemento esencial de su existencia.
c. Como ente público primario porque es el primer ente público territorial en que se organizan los ciudadanos.
d. Las tres opciones son correctas.

254. La definición del municipio como entidad básica de la organización territorial del Estado, y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos se contiene en:

a. En la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985.
b. El artículo 137 de la Constitución.
c. El artículo 140 de la Constitución.
d. El artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

255. En relación con la autonomía local podemos afirmar:

a. El derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de una ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
b. Es de carácter político y administrativo.
c. Se ejercita respetando la situación de dependencia o subsidiariedad orgánica respecto

de otras Administraciones Públicas.
d. Ninguna respuesta es correcta.

256. Respecto al término municipal podemos decir que:

a. Es el territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
b. Todo municipio español pertenece, al menos, a una provincia.
c. El término está formado exclusivamente por territorios continuos.
d. La división del término municipal en zonas y barrios es competencia de la Diputación Provincial.

257. En virtud de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, señale la opción que no está prevista para la alteración de los términos municipales existentes:

a. Por incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes.
b. Por fusión de dos o más municipios sean limítrofes o discontinuos.
c. Por segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro independiente.
d. Por segregación de parte del territorio de un municipio para agregarla a otro limítrofe.

258. Según el artículo 3 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, la creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse:

a. Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados y siempre que los municipios resultantes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales.
b. Siempre que para los municipios resultantes no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
c. Siempre sobre la base de núcleos de población territorialmente próximos y cercanos que cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

259. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán:

a. A través de los procedimientos establecidos en la legislación estatal.
b. En virtud de la regulación de las propias Entidades Locales y de los acuerdos que entre los municipios interesados se suscriban.
c. Por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

260. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la alteración de términos municipales:

a. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Tribunal de Cuentas.
b. Requerirán informe de la asesoría jurídica del Ministerio de Administración Territorial o de aquel que realice sus funciones.
c. No podrá suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales.
d. Requerirán informe favorable del Ministerio de Hacienda, de la asesoría jurídica del Ministerio de Administración Territorial o de aquel que realice sus funciones.

261. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos:

a. 10.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles.
b. 7.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles.
c. 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

262. Según el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, toda persona que viva en España:

a. Si vive en varios municipios deberá optar por inscribirse en uno de ellos exclusivamente.
b. La condición de vecino se adquiere a los treinta días de su inscripción en el Padrón.
c. Si vive en varios municipios deberá inscribirse en aquel en el que tenga en propiedad bienes inmuebles.
d. Está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.

263. Según el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ¿Qué entendemos por población municipal?

a. Es un concepto jurídico indeterminado.
b. Serán los residentes en un término municipal concreto.
c. El conjunto de personas inscritas en el Padrón Municipal.
d. Los residentes, los transeúntes y los domiciliados.

264. Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el organismo que asumirá, en caso de que un Ayuntamiento no tenga

capacidad económica suficiente, la gestión informatizada del Padrón Municipal es:

a. El Instituto Nacional de Estadística.
b. La Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas.
c. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.
d. El Consejo de Empadronamiento de la Consejería de Gobernación.

265. Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son derechos de los vecinos de una Entidad Local:

a. Ser elector y elegible, de acuerdo con la legislación electoral.
b. Participar en la gestión municipal.
c. La colaboración de carácter voluntario en los órganos de gobierno y administración municipal.
d. Todas las opciones son correctas.

266. Según el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿En qué casos es posible la realización de una consulta popular en el ámbito de las Entidades Locales?

a. Resulta posible en asuntos de especial relevancia para los intereses de los vecinos, incluidos los relativos a la Hacienda Local.
b. Resulta posible en asuntos de competencia propia municipal y de carácter local.
c. No resulta posible la celebración de ese tipo de consultas populares, que están reservadas a Ley Orgánica.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

267. Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal, corresponde:

a. Al Ayuntamiento, excepto el caso del mantenimiento.
b. A la Diputación Provincial correspondiente.
c. Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.
d. A la Comunidad Autónoma de su territorio en lo que se refiere al mantenimiento y revisión.

268. Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ministerio al que se encuentra adscrito el Consejo de

Empadronamiento es:

a. Al Ministerio de Administraciones Públicas.
b. Al Ministerio de Política Territorial.
c. Al Ministerio de Economía y Hacienda.
d. Al Ministerio de la Presidencia.

269. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Gobierno y la administración municipal corresponde:

a. Al Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales.
b. Al Concejo Abierto en los casos legalmente previstos.
c. Al Pleno municipal y al Pleno de la Diputación.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

270. Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el alcalde no puede delegar su función de:

a. Dirigir la administración municipal.
b. Representar al Ayuntamiento.
c. Impulsar los servicios municipales.
d. Impulsar las obras municipales.

271. Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ¿Qué misión específica atribuye la legislación a la figura del teniente de alcalde?

a. Sustituir al alcalde en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
b. Es una figura únicamente con contenido político.
c. Además de la representación política, dictar Bandos en el ámbito de sus competencias delegadas.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

272. Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Alcalde podrá delegar las aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización en:

a. La Junta de Gobierno Local.
b. El Pleno.
c. En los tenientes de alcalde.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

273. Según el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Junta de Gobierno Local se integra por:

a. El alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los

mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
b. El alcalde y un número de concejales no superior a la cuarta parte del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
c. El alcalde y un número de concejales no superior a cinco, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
d. El alcalde y siete concejales nombrados y separados por aquél, previo visto bueno del Pleno.

274. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias:

a. Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias.
b. El Estado y las Comunidades Autónomas a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública.
c. El Estado en el ejercicio de sus competencias, a solicitud de los Municipios interesados.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

275. Las Comisiones Informativas son:

a. Órganos complementarios sin atribuciones resolutorias, que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, de la Comisión de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo si han de adoptarse acuerdos declarados urgentes.
b. Órganos integrados por miembros de la Corporación y asesores designados por el Acalde, y de ellas participarán todos los grupos políticos integrantes de la misma.
c. Comisiones que pueden ser técnicas o políticas y el Alcalde es el Presidente nato de todas ellas, aunque la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación a propuesta de la propia Comisión.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

276. La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, ha motivado nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración Local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales; la norma más relevante es:

a. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
b. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
c. La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

Tema 11. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal. La coordinación en la prestación de determinados servicios por las Diputaciones Provinciales. Las competencias propias de las provincias en la Ley 5/2010, de 11 de junio.

277. Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en:

a. Ciudades, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
b. Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
c. Cabildos, comarcas y las provincias que se constituyan.
d. Municipios, comarcas y las provincias que se constituyan.

278. Según el artículo 140 de la Constitución, gozarán de personalidad jurídica plena:

a. Las provincias.
b. Los municipios.
c. Las comarcas.
d. Las islas.

279. Según el artículo 141 de la Constitución, la provincia es una Entidad Local con:

a. Personalidad jurídica única.
b. Personalidad jurídica plena.
c. Personalidad jurídica propia.
d. Personalidad jurídica íntegra.

280. Según el artículo 141 de la Constitución, la alteración de los límites provinciales:

a. No podrá llevarse a cabo.
b. Habrá de ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta.
c. Habrá de ser aprobada por el Gobierno en un plazo de 30 días desde la presentación de la propuesta.
d. Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

281. Según el artículo 141 de la Constitución, el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a:

a. Los miembros del Consejo de Gobierno correspondiente.
b. Las Cámaras de representación provincial.
c. Los Gobiernos locales.
d. Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

282. En relación con la Administración Local, el artículo 141 de la Constitución establece que:

a. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Comarcas.
b. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
c. Las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado.
d. Las Haciendas Locales se nutrirán exclusivamente de tributos propios.

283. Según la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias de las Diputaciones Provinciales, como las de cualquier Entidad Local, pueden ser:

a. Competencias propias, competencias atribuidas por delegación, bien del Estado, bien de las Comunidades Autónomas.
b. Competencias propias y competencias atribuidas por delegación de las Comunidades Autónomas.
c. Competencias propias y competencias atribuidas por delegación del Estado.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

284. Según el artículo 7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Diputaciones Provinciales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando:

a. No se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
b. No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.
c. El ejercicio de estas competencias se realice en los términos previstos en la legislación del Estado.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

285. En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro de la esfera de sus competencias ¿qué potestades, entre otras, corresponden a las Diputaciones Provinciales?

a. La potestad de crear Mancomunidades en su ámbito territorial.
b. La potestad de programación o planificación.
c. La potestad de crear Consorcios en su ámbito territorial.
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

286. Entre los objetivos básicos que persigue la reforma operada por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se encuentra:

a. Reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes.

b. Evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes.
c. Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.
d. Todas las opciones son correctas.

287. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son competencias propias de las Diputaciones:

a. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.
b. La prestación de servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 2.000 habitantes.
c. En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia.
d. Garantizar en los municipios de menos de 5.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.

288. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la coordinación y supervisión de la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión de municipios corresponde a:

a. La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, no regula la fusión de municipios.
b. La Comunidad Autónoma.
c. La Comisión Nacional de Administración Local.
d. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma.

289. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios con menos de 20.000 habitantes será la Diputación Provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los servicios de:

a. La contratación centralizada.
b. Ferias, abastos y mercados.
c. Transporte colectivo urbano.
d. Protección de la salubridad pública.

290. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando el municipio no proceda a su prestación, corresponderá a la Diputación la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de:

a. Menos de 5.000 habitantes.
b. Menos de 10.000 habitantes.
c. Menos de 20.000 habitantes.
d. Menos de 15.000 habitantes.

291. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a la Diputación, en todo caso, garantizar la prestación de los servicios de secretaría e intervención en:

a. Los municipios de menos de 1.000 habitantes.
b. Los municipios de menos de 20.000 habitantes.
c. Los municipios de menos de 10.000 habitantes.
d. En todos los municipios.

292. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando el municipio no proceda a su prestación, corresponde a la Diputación la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de:

a. Menos de 5.000 habitantes.
b. Menos de 20.000 habitantes.
c. Menos de 10.000 habitantes.
d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

293. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, son competencias propias de las Diputaciones:

a. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
b. La asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
c. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
d. Todas las opciones son correctas.

294. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, las Diputaciones Provinciales, con relación a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica con los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión:

a. Firman convenios con los municipios interesados.
b. Realizan programas de colaboración para un periodo de cuatro años.
c. Aprueban anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.
d. Realizan proyectos de inversión.

295. Según el artículo 116 ter de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, todas las Entidades Locales calcularán el coste efectivo de los servicios que prestan:

a. Antes del día 15 de diciembre de cada año.
b. Antes del día 1 de diciembre de cada año.
c. Antes del día 31 de diciembre de cada año.

d. Antes del día 1 de noviembre de cada año.

296. Según el artículo 32 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones deberá efectuarse de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que:

a. Sea acordado por el Pleno que su titular no reúna dicha condición de funcionario.
b. Sea acordado por el Pleno que puedan pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A2.
c. Sea acordado por el Pleno que su titular pueda ser designado libremente por el mismo.
d. El correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.

297. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal será aprobado por la Diputación:

a. Cada cuatro años.
b. Anualmente.
c. Cada dos años.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

298. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial por parte de las Diputaciones Provinciales de régimen común, prevista en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se llevará a efecto:

a. De acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
b. En régimen de subsidiariedad en materia de competencias propias y en régimen de cooperación en las demás.
c. De acuerdo con el principio de norma más beneficiosa para los intereses locales.
d. De acuerdo con el principio de capacidad económica de los vecinos del territorio en cuestión.

299. Según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de las siguientes no es una competencia atribuida al Pleno de la Diputación:

a. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
b. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
c. La aprobación de las ordenanzas.
d. Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación.

300. Según el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la asistencia provincial podrá ser:

a. Obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o concertada.
b. Facultativa a elección de los municipios concernidos o concertada.
c. Optativa a solicitud de los municipios interesados y reglada.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

301. Según el artículo 6.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, las competencias locales de dicha norma tienen la consideración de:

a. Propias y mínimas.
b. Podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales.
c. Supramunicipales y, por tanto, pasan a la Comunidad Autónoma.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

Tema 12. Las relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones territoriales en la normativa estatal y autonómica. Deberes recíprocos entre Administraciones. Tutela y control de las Entidades Locales. Los convenios en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

302. La Administración Local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de:

a. Información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
b. Reciprocidad y eficacia.
c. Información mutua, reciprocidad y descentralización.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

303. Según el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión Especial de Cuentas de las Diputaciones Provinciales:

a. Está integrada exclusivamente por miembros de la Corporación, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, de los grupos políticos.
b. Los miembros son nombrados y separados libremente por el Presidente de entre los miembros de la Corporación.
c. Está formada por miembros de la Corporación y técnicos del área correspondiente, tiene funciones deliberatorias de los asuntos sometidos a consideración de la Junta de Gobierno.
d. Dado que no son órganos necesarios, su composición deberá establecerse a través del correspondiente Reglamento Orgánico.

304. Según el artículo 123 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las Comisiones Informativas en las Diputaciones Provinciales:

a. Son órganos con atribuciones técnicas en relación a los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno.
b. Son órganos de estudio, informe o consulta de asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno.
c. Son órganos de carácter complementario por lo que no tienen funciones atribuidas legalmente.
d. Es un órgano de composición no partidista en cuanto que todos los grupos presentes en la Corporación están representados en condiciones igualitarias.

305. Según el artículo 2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, el objeto de la norma es:

a. Determinar las competencias y las potestades de los municipios y de los demás Entes Locales.
b. Regular las posibles transferencias y delegaciones a las Entidades Locales de

competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c. Regular las relaciones entre las Entidades Locales de Andalucía y las instituciones de la Junta de Andalucía.
d. Todas las opciones son correctas.

306. Según el artículo 16 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, respetando la voluntad de las entidades afectadas y la normativa vigente, la Junta de Andalucía:

a. Podrá transferir competencias a los municipios, o delegarlas con carácter ordinario en estos o en las provincias.
b. Podrá transferir competencias a los municipios o a las provincias por razones de eficacia, eficiencia y economía.
c. Podrá delegar competencias en los municipios o en las provincias en virtud de las relaciones de coordinación estatutariamente previstas.
d. Todas las opciones son correctas.

307. Según el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, los Ayuntamientos y sus organismos y entidades dependientes o vinculadas deberán publicar las disposiciones y actos administrativos generales en la sede electrónica de su titularidad o, en su defecto, en la sede electrónica de la respectiva Diputación Provincial:

a. En el plazo de tres días desde su adopción.
b. En el plazo de cinco días desde su adopción.
c. En el plazo de tres días hábiles desde su adopción.
d. Al día hábil siguiente a su adopción.

308. Según el artículo 57 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales se constituye como:

a. Órgano político de la coordinación que la Comunidad Autónoma puede desplegar sobre las Entidades Locales.
b. Órgano de representación de los Municipios y las Provincias ante las instituciones de la Junta de Andalucía con la finalidad de garantizar el respeto a las competencias locales.
c. Órgano autónomo técnico de asesoramiento de la Junta de Andalucía en relación a las competencias locales.
d. Todas las opciones son correctas.

309. El artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, posibilita la asociación entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro de:

a. Las Diputaciones Provinciales.
b. Las Áreas Metropolitanas.
c. Los Municipios.

d. Todas las opciones son correctas.

310. Según el Preámbulo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dicha norma establece un régimen completo de las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, que deberán sujetarse a los postulados constitucionales de:

a. La adecuación y respeto al sistema de distribución de competencias y la solidaridad interterritorial.
b. La programación y evaluación de resultados y el respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
c. La coherencia de actuación de las distintas Administraciones Públicas, la transparencia y la eficacia en la gestión.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

311. Según el Preámbulo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, se definen y diferencian dos principios clave:

a. La cooperación que es voluntaria y la coordinación que es obligatoria.
b. La programación que es obligatoria y la cooperación que es voluntaria.
c. La cooperación que es obligatoria y la coordinación que es voluntaria.
d. La transparencia que es obligatoria y la coordinación que es voluntaria.

312. Según el artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Administración General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, se comportarán de acuerdo con:

a. El principio de lealtad institucional.
b. El deber de reciprocidad y eficacia.
c. La obligación de información mutua, reciprocidad y descentralización.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

313. Según el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el deber de las Entidades Locales de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas es responsabilidad de:

a. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones.
b. Los Presidentes de las Corporaciones Locales.
c. El Concejal que deba levantar acta de sesión en la que se haya adoptado el acuerdo o el acto.
d. Todas las opciones son correctas.

314. Según el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades

Autónomas, podrá tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que se suscriban:

a. El convenio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda formalizarse a través de un consorcio.
b. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio.
c. La elección de la opción del convenio o del consorcio para la cooperación administrativa será potestativa del Presidente de la Entidad Local que inste su creación.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

315. El artículo 58 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, admite la posibilidad de que, por ley, el Estado y las Comunidades Autónomas creen órganos de colaboración con las Entidades Locales:

a. Estos órganos serán únicamente deliberantes o consultivos.
b. Estos órganos podrán tener ámbito autonómico o provincial.
c. Estos órganos podrán tener carácter general o sectorial.
d. Todas las opciones son correctas.

316. Según el artículo 59 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, y sus fines no puedan alcanzarse por los procedimientos habituales, las leyes del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán:

a. Atribuir al gobierno de la nación o al respectivo consejo de gobierno, la facultad de coordinar la actividad de la Administración Local y, en especial, de las Diputaciones Provinciales.
b. Atribuir al gobierno central la facultad de coordinar la actividad de la Administración Local y, en especial, de las Diputaciones Provinciales en el ejercicio de sus competencias.
c. Atribuir al consejo de gobierno de la Comunidad Autónoma concernida la facultad de coordinación y control de las Diputaciones Provinciales.
d. Atribuir al gobierno central la facultad de coordinación y control de las Diputaciones Provinciales.

317. Según los artículos 60 y 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ante supuestos incumplimientos de las obligaciones legales por una Entidad Local se podrá proceder por el Consejo de Ministros a la disolución de los órganos de las corporaciones locales:

a. A iniciativa del Senado y previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente.
b. A iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado.
c. A iniciativa propia previa comunicación al Consejo de Gobierno de la Comunidad

Autónoma correspondiente y previo acuerdo favorable del Senado.
d. A iniciativa propia y previo acuerdo favorable del Senado con el dictamen favorable del Consejo de Estado.

318. Según los artículos 145 a 154 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación a las relaciones de cooperación, no aparecen los siguientes órganos:

a. Los Consejos de Gobiernos Locales.
b. Las Conferencias Sectoriales.
c. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación.
d. Las Comisiones Territoriales de Coordinación.

319. Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a:

a. Los deberes de transparencia, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
b. Los deberes de lealtad institucional, solidaridad territorial, información mutua, y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
c. Los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
d. Los deberes de respeto a los ámbitos competenciales respectivos, cooperación, proporcionalidad e información mutua.

320. Según el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, podemos definir los convenios como:

a. Acuerdos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes entre sí o con sujetos de Derecho privado para un fin común.
b. Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común.
c. Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes cuyo objeto son prestaciones propias de los contratos que no han podido materializarse.
d. Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de Derecho privado para un fin común.

321. Según el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no pertenecen a la tipología de convenios suscritos por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de Derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas:

a. Los convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones

Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de Derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones Públicas.
b. Los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas.
c. Los convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.
d. Los convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de Derecho público y un sujeto de Derecho privado.

322. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios:

a. Los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Secretarios de Estado.
b. Los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de dichas entidades y organismos públicos.
c. Los Presidentes o Directores de las entidades y organismos públicos dependientes de una misma Administración Pública.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

323. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de Derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces:

a. Una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
b. Una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el Boletín Oficial del Estado.
c. Una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
d. Una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.

324. Según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al contenido de los convenios, estos deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior:

a. A seis años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
b. A cinco años, prorrogables por igual período de tiempo.
c. A cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
d. A tres años, prorrogables por acuerdo de las partes hasta un máximo de quince anualidades.

325. Según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los convenios se extinguen:

a. Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.

b. Por incurrir en causa de resolución.
c. Por causa de fuerza mayor.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

326. Según el artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma:

a. Dentro de los tres meses siguientes a su suscripción.
b. Dentro de los dos meses siguientes a su suscripción.
c. Dentro de los treinta días siguientes a su suscripción.
d. A la mayor brevedad una vez cumplimentados los trámites de registro y publicación.

Tema 13. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones, actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de acuerdos. Resoluciones de la Presidencia de la Corporación. El registro de documentos. Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. La información y participación ciudadanas.

327. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los órganos colegiados de las Entidades Locales funcionan:

a. En régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida.
b. En régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias que pueden ser, además, urgentes.
c. En régimen de sesiones ordinarias de periodicidad quincenal y sesiones extraordinarias convocadas con, al menos, cuarenta y ocho horas de preaviso.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

328. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los Ayuntamientos y en las Diputaciones Provinciales de municipios de más de 20.000 habitantes el Pleno celebra sesión ordinaria:

a. Como mínimo cada mes.
b. Cada dos meses.
c. Como mínimo cada dos meses.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

329. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes, el Pleno de las Corporaciones Locales:

a. Celebra sesión ordinaria cada dos meses.
b. Celebra sesión ordinaria como mínimo cada dos meses.
c. Celebra sesión ordinaria como mínimo cada tres meses.
d. Celebra sesión ordinaria cada mes.

330. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los Ayuntamientos de municipios de hasta 5.000 habitantes, el Pleno de las Corporaciones Locales:

a. Celebra sesiones ordinarias cada tres meses.
b. Celebra sesiones ordinarias cada dos meses.
c. Celebra sesiones ordinarias como mínimo cada dos meses.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

331. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando:

a. Así lo decida el Presidente o lo solicite la quinta parte del número de miembros de la Corporación.
b. Así lo decida el Presidente y cuente con la ratificación de, al menos, cinco miembros de la Corporación.
c. Así lo decida el Presidente o lo solicite un tercio del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente.
d. Así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.

332. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno:

a. No podrá demorarse por más de veinte días naturales desde que fuera solicitada.
b. No podrá demorarse por más de veinte días hábiles desde que fuera solicitada.
c. No podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

333. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, si el Presidente de la Corporación no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales legalmente estipulado dentro del plazo preceptivo:

a. Quedará automáticamente convocado para el sexto día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo.
b. Quedará automáticamente convocado para el primer día de la semana siguiente al de la finalización de dicho plazo.
c. Quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo.
d. Quedará automáticamente convocado para el tercer día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo.

334. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las sesiones plenarias han de convocarse:

a. Al menos, con dos días hábiles de antelación, en el caso de las extraordinarias con carácter urgente la urgencia deberá ser ratificada por el Pleno.
b. Al menos, con cinco días naturales de antelación, en el caso de las extraordinarias con cuarenta y ocho horas de anticipación constando de modo fehaciente la recepción de la convocatoria de todos los miembros de la corporación.
c. Al menos, con tres días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser sometida a votación en el Pleno.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

335. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate del Pleno y, en su caso, a la votación:

a. Deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el día siguiente a la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.
b. Deberá enviarse a los Concejales o Diputados, mediante el sistema que acredite fehacientemente su puesta a disposición o su recepción, el mismo día de la convocatoria.
c. Deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

336. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno se constituye válidamente:

a. Con la asistencia de la cuarta parte del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.
b. Con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.
c. Con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a cinco, incluyendo al Presidente del órgano.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

337. Según el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la adopción de acuerdos se produce mediante:

a. Votación nominal, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación ordinaria.
b. Votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación nominal.
c. Votación ordinaria, salvo que la legislación aplicable exija para supuestos excepcionales la votación nominal.
d. Votación ordinaria, salvo los plenos convocados con carácter extraordinario de urgencia en los que procederá la votación nominal.

338. Según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan:

a. Como regla general, por mayoría simple calculada en virtud del número de los miembros que legalmente componen la Corporación.
b. Por mayoría simple calculada en virtud del número de los miembros que legalmente componen la Corporación en todos los plenos ordinarios.
c. Como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

339. Según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para acordar la alteración del nombre y de la capitalidad del municipio y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo, se requiere:

a. Mayoría simple calculada en virtud del número de los miembros que legalmente

componen la Corporación.
b. Mayoría simple de los miembros presentes de la Corporación.
c. El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

340. Según el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios de gran población, no se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno para:

a. La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica sobre la regulación del Pleno.
b. La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos.
c. El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras Administraciones públicas.
d. La adopción de acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal.

341. Según el artículo 196 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, se publican y notifican:

a. Los acuerdos que adopten el Pleno y la Comisión de Gobierno, cuando tengan carácter decisorio.
b. Las Resoluciones del Alcalde o Presidente de la Corporación y miembros de ella que ostenten delegación cuando tengan carácter decisorio.
c. Todas las comunicaciones y resoluciones del Alcalde o Presidente de la Corporación adoptadas en las sesiones extraordinarias y urgentes del Pleno de la Entidad concernida.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

342. Según el artículo 198 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, en relación al Libro de Actas, podemos señalar que:

a. Es un instrumento público solemne, ha de estar previamente foliado y encuadernado y legalizado.
b. No podrán utilizarse medios mecánicos para la transcripción de las actas.
c. Cada hoja contendrá la rúbrica del Alcalde o Presidente.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

343. Según el artículo 204 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, el Secretario expedirá:

a. Las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la Entidad.

b. Las copias y certificados de los libros y documentos que existan en las distintas dependencias de la Entidad.
c. Las certificaciones relativas al objetivo de estabilidad presupuestaria para los tres ejercicios siguientes para el conjunto de la Administración de la Entidad Local.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

344. Según el artículo 151 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, en todas ellas habrá:

a. Un Registro General de Entrada para que conste con claridad la llegada de los documentos que se reciban.
b. Un Registro General de Salida para que conste con claridad la salida de los documentos que hayan sido despachados definitivamente.
c. Un único Registro General abierto al público todos los días hábiles durante las horas prevenidas en la legislación de procedimiento administrativo común.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

345. Según el artículo 192 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, las resoluciones de los Alcaldes y de los Presidentes de las Corporaciones locales:

a. Se extenderán a su nombre.
b. Si las resoluciones administrativas se dictan por delegación, se hará constar expresamente y se considerarán dictadas por la autoridad que la haya conferido.
c. Si las resoluciones administrativas se dictan por delegación, se hará constar expresamente y se considerarán dictadas por el Presidente de la Corporación a todos los efectos.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

346. Según el artículo 197 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, los Ayuntamientos capitales de Provincia o de más de 50.000 habitantes, así como las Diputaciones Provinciales, publicarán un Boletín de información municipal o provincial, donde se inserte un extracto de todos los acuerdos y resoluciones adoptados y, además, cuando sea obligatoria la divulgación:

a. Al menos una vez al mes.
b. Con carácter bimensual.
c. Al menos una vez al trimestre.
d. Con la periodicidad que acuerde en cada Entidad el Pleno de la misma, asegurando una publicación mínima anual.

347. Según el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán impugnar los actos y acuerdos de las Entidades Locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico:

a. Los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo.
b. La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.
c. Los miembros de las Corporaciones que hubieran asistido a la sesión que adoptó el acto o acuerdo.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

348. Según el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Entidades Locales territoriales estarán legitimadas para promover:

a. La impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas cuando se estime que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada.
b. La impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes del Estado cuando se estime que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada.
c. La impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes de las Comunidades Autónomas cuando se estime que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada.
d. La impugnación ante el Tribunal Constitucional de la normativa de la Unión Europea cuando se estime que lesiona la autonomía constitucionalmente garantizada.

349. Según el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad Local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, para que anule dicho acto:

a. A la mayor brevedad.
b. En el plazo máximo de diez días desde que conste la recepción del requerimiento en el Registro de Entrada de la Entidad.
c. En el plazo máximo de un mes.
d. De forma inmediata.

350. Según el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son públicas:

a. En todos los casos las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales, los debates y la votación.
b. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales.
c. En todos los casos las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales y de la Junta de Gobierno Local, los debates y la votación.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

351. Según el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones Locales y sus antecedentes:

a. Todos los inscritos en el Padrón Municipal de la Entidad afectada.

b. Todos los ciudadanos.
c. Todos los que acrediten la condición de interesados en los asuntos tratados en los acuerdos respecto a los que se solicita la información.
d. Todos los representantes acreditados de entidades o colectividades que acrediten la condición de interesados.

BLOQUE III

Tema 14. Los tributos. Concepto, fines y clases de tributos. La relación jurídico-tributaria: Concepto y elementos. Las obligaciones tributarias: La obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y las obligaciones tributarias formales. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria. Base imponible: Concepto y métodos de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. La deuda tributaria: Concepto.

352. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los tributos son:

a. Ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir.
b. Medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.
c. Prestaciones pecuniarias establecidas por el ejecutivo para el sostenimiento de los gastos públicos.
d. Son correctas las dos primeras opciones.

353. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la definición de tributos se deriva una característica básica diferenciadora de los mismos:

a. Todo tributo debe estar amparado por una norma con rango de ley.
b. Forman parte de los ingresos públicos de carácter coactivo.
c. El Estado es competente para regular sus propios tributos, y el sistema tributario de las Comunidades Autónomas respecto al Estado.
d. Son correctas las dos primeras opciones.

354. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la asistencia mutua regulada por la Ley hace referencia a:

a. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales.
b. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español reciba de la Unión Europea y otros Estados o entidades internacionales o supranacionales.
c. El conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español desarrolle con la Unión Europea o entidades internacionales o supranacionales.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

355. Según el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la asistencia mutua regulada por la Ley hace referencia a:

a. Materias en las que las Comunidades Autónomas tienen competencias de ejecución.
b. Ámbitos en los que el Estado tiene competencias compartidas con las Comunidades Autónomas.
c. Ámbitos en los que el Estado tiene competencia exclusiva.
d. Materias de competencia compartida entre el Estado y la Unión Europea.

356. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las prestaciones pecuniarias reguladas por la norma se clasifican en:

a. Tasas, contribuciones especiales e impuestos.
b. Tributos, tasas y contribuciones especiales.
c. Tasas, tributos e impuestos.
d. Impuestos, tributos y tasas.

357. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las tasas son:

a. Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
b. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario.
c. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

358. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los impuestos son:

a. Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.
b. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes.
c. Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios.
d. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

359. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la relación jurídico-tributaria:

a. Es el conjunto de obligaciones y deberes originados por la aplicación de los tributos.
b. Es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos.

c. Es el conjunto de derechos y potestades que competen a la Administración originados por la aplicación de los tributos.
d. Es el conjunto de deberes y derechos que ostenta un obligado tributario originados por la aplicación de los tributos.

360. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la relación jurídico-tributaria:

a. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para la Administración.
b. Pueden derivarse sanciones tributarias para el obligado en caso de su incumplimiento.
c. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento.
d. Pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario.

361. Según establece el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, específicamente:

a. Las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias.
b. Las de realizar pagos a cuenta y las establecidas entre particulares resultantes del tributo.
c. Las accesorias y las obligaciones de realizar pagos a cuenta.
d. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

362. Según establece el artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación tributaria principal tiene por objeto:

a. La realización de pagos a cuenta.
b. El pago de la cuota tributaria.
c. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
d. La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos.

363. Según establece el artículo 24 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las obligaciones que se generan como consecuencia de actos de repercusión, de retención o de ingreso a cuenta previstos legalmente, son:

a. Obligaciones accesorias.
b. Obligaciones formales.
c. Obligaciones entre particulares resultantes del tributo.
d. Obligaciones subsidiarias.

364. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las obligaciones que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación

tributaria:

a. Son obligaciones tributarias formales.
b. Son obligaciones tributarias entre particulares resultantes del tributo.
c. Son obligaciones tributarias subsidiarias.
d. Son obligaciones tributarias accesorias.

365. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las obligaciones de satisfacer el interés de demora:

a. Son obligaciones tributarias accesorias.
b. Son obligaciones tributarias complementarias.
c. Son obligaciones tributarias subsidiarias.
d. Son obligaciones tributarias subordinadas.

366. Según establece el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las sanciones tributarias:

a. Tienen la consideración de obligaciones accesorias.
b. No tienen la consideración de obligaciones accesorias.
c. Tienen la consideración de obligaciones principales.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

367. Según establece el artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas es:

a. Una obligación tributaria principal.
b. Una obligación tributaria accesoria.
c. Una obligación tributaria formal.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

368. Según establece el artículo 49 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la obligación tributaria principal y la obligación de realizar pagos a cuenta se determinarán a partir de:

a. La deuda tributaria, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo.
b. Las exacciones, las bases tributarias y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo.
c. Los hechos imponibles, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo.
d. Las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en este capítulo, según disponga la ley de cada tributo.

369. Según establece el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base imponible es:

a. La cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra.
b. La magnitud resultante de practicar, en su caso, en el hecho imponible las reducciones establecidas en la ley.
c. La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible.
d. La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.

370. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos:

a. Estimación directa, objetiva o indirecta.
b. Estimación directa y estimación objetiva.
c. Estimación directa y estimación indirecta.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

371. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las bases imponibles:

a. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación indirecta.
b. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación objetiva.
c. Se determinarán con carácter general a través del método de estimación directa.
d. Se determinarán exclusivamente por estimación directa en el caso de las personas físicas.

372. Según el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a la estimación objetiva:

a. Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación que tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios.
b. Podrá establecer la ley los supuestos para su aplicación.
c. Su aplicación se llevará a efecto previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario.
d. Únicamente será aplicable a las personas jurídicas.

373. Según el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el método de estimación indirecta se aplicará:

a. Previo acuerdo entre la Administración y el obligado tributario.
b. Cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible.
c. En los supuestos establecidos legalmente.
d. Únicamente será aplicable a las personas jurídicas.

374. Según el artículo 54 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la base liquidable es:

a. La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.
b. La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible.
c. La cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal una vez aplicadas y compensadas las exacciones correspondientes.
d. La magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones establecidas en la ley.

375. Según el artículo 55 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a los tipos de gravamen:

a. Habrán de ser específicos y deberán aplicarse según disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la base liquidable.
b. La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados.
c. Podrán ser especificados reglamentariamente.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

376. Según el artículo 56 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la cuota íntegra se determinará:

a. Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable o según cantidad fija señalada al efecto.
b. Aplicando el tipo de gravamen legalmente especificado a la base liquidable.
c. Aplicando sobre la cuota líquida las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo.
d. Aplicando a la cuota líquida las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.

377. Según el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda tributaria estará constituida:

a. Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.
b. En su caso, por el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, del período ejecutivo o exigibles legalmente.
c. En su caso, por las sanciones tributarias que puedan imponerse.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

Tema 15. Los obligados tributarios: Clases. Derechos y garantías. Los sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. Exenciones subjetivas. La capacidad de obrar en el orden tributario. Representación. Residencia y domicilio fiscal.

378. Entendemos por obligados tributaros:

a. Personas físicas a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
b. Personas físicas o jurídicas a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
c. Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias de pago.
d. Personas físicas o jurídicas y entidades a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto de pago como formales.

379. Según el artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, no son obligados tributarios:

a. Los contribuyentes y los sustitutos del contribuyente.
b. Los obligados a realizar o soportar pagos a cuenta (pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta), los obligados a repercutir o a soportar la repercusión.
c. Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos y los sucesores.
d. Los albaceas testamentarios.

380. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, incorpora nuevos derechos de los obligados tributarios. Señale el supuesto ya recogido en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes:

a. El derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas.
b. El derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma.
c. El derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que consten en diligencia las manifestaciones del interesado.
d. El derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que consten en diligencia las manifestaciones del interesado o el derecho a presentar cualquier documento que se estime conveniente.

381. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios, entre otros, tienen derecho a obtener el reembolso con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto:

a. Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado parcialmente improcedente por sentencia.

b. Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado totalmente improcedente por sentencia.
c. Del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.
d. Del coste de los avales aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado parcialmente improcedente por sentencia.

382. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios, entre otros, tienen derecho a obtener:

a. Las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos, con abono del interés de demora pertinente sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
b. Las devoluciones de ingresos indebidos que procedan previo requerimiento al efecto, con el abono de intereses de demora.
c. En los plazos legalmente previstos, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos con abono del interés legal pertinente.
d. En los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo previo requerimiento al efecto.

383. Los deudores principales de la obligación del ingreso de la deuda tributaria son:

a. El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar pagos a cuenta, fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias.
b. El sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, los obligados a realizar pagos a cuenta, fraccionados, retenciones o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias.
c. El sujeto pasivo, los obligados a realizar pagos fraccionados o retenciones, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias.
d. El sujeto pasivo, ya sea como contribuyente o como sustituto del contribuyente, los obligados a realizar pagos o ingresos a cuenta, los obligados en las obligaciones entre particulares, los sucesores y los beneficiarios de los supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias.

384. Según el artículo 38 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación al obligado a repercutir, podemos afirmar que:

a. Es la persona o entidad que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley disponga otra cosa.

b. El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración Tributaria, pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida.
c. Es la persona que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley disponga otra cosa.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

385. Según establece el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación el Consejo para la Defensa del Contribuyente:

a. Se integra en el Ministerio de Hacienda.
b. Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y efectúa sugerencias y propuestas.
c. Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y asesora a los interesados.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

386. Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, es sujeto pasivo:

a. El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal.
b. El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.
c. El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir las obligaciones tributarias formales.
d. El obligado tributario que tenga el carácter de contribuyente.

387. Según establece el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, es sustituto:

a. El sujeto que de forma voluntaria efectivamente ingresa el importe de las obligaciones tributarias.
b. El sujeto pasivo que se hace cargo del cumplimiento de las obligaciones formales inherentes a la relación tributaria.
c. El sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.
d. Aquel que realiza pagos a cuenta y retenciones derivadas de obligaciones establecidas entre particulares resultantes del tributo.

388. Según establece el artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, son supuestos de exención:

a. Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.
b. Aquellos en los que no hay realización del hecho imponible al tratarse de presupuestos que caen fuera de la órbita del impuesto.

c. Aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias.
d. Aquellos en los que se produce la exención de la obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

389. Según se desprende del artículo 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a los supuestos de exención:

a. El establecimiento, modificación, prórroga y supresión están reservados a la ley.
b. Deben ser interpretadas de forma restrictiva.
c. Se establecen a favor de determinadas personas, que a pesar de realizar el hecho imponible no quedan obligadas al pago del tributo.
d. Todas las opciones son correctas.

390. Las exenciones pueden clasificarse en:

a. Exenciones administrativas si se aplican en la tramitación y exenciones reglamentarias, en virtud de las normas que las establecen.
b. Exenciones objetivas, que el legislador con carácter previo establece respecto a determinados hechos o situaciones, que, a pesar de estar incluidos dentro del ámbito del hecho imponible, no dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, y exenciones subjetivas, que se establecen a criterio del órgano liquidador previa solicitud del interesado.
c. Exenciones totales, que excluyen absolutamente el pago de la cuota tributaria y exenciones parciales, que reducen una parte de la cuota, incidiendo en los elementos de cuantificación de la misma.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

391. La exención opera:

a. En el ámbito cuantificador del tributo.
b. En el ámbito de la carga tributaria del tributo, como mecanismo técnico que minora el cálculo de la base.
c. En el ámbito de la cuota íntegra ya determinada para concretar la cuota líquida del tributo.
d. En el ámbito identificador del mismo o delimitación del hecho imponible.

392. Según establece el artículo 44 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a la capacidad de obrar en el orden tributario, esta se reconoce a:

a. Las personas que la tengan conforme a derecho.
b. Los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia.
c. Los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.
d. Son correctas las dos primeras opciones.

393. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, necesitarán actuar mediante representantes legales:

a. Las personas que no carezcan de capacidad de obrar.
b. Los menores emancipados.
c. Las personas jurídicas.
d. Los socios de entidades mercantiles.

394. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, actuarán como representantes legales de las personas jurídicas:

a. Quienes ostenten la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes.
b. Quienes ostenten la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo de la entidad en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes.
c. Quienes ostenten la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por acuerdo societario válidamente adoptado en el momento en que se produzcan el devengo de la obligación tributaria.
d. Quienes la ostenten, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de los socios o partícipes.

395. Según establece el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la representación de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, corresponderá a:

a. El que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente.
b. El que aparentemente ejerza la gestión o dirección.
c. Cualquiera de sus miembros o partícipes.
d. El que pueda acreditar que la ostenta, en su defecto el que aparentemente ejerza la gestión o cualquiera de sus miembros.

396. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar:

a. Por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal.
b. Por medio de abogado y procurador.
c. Por medio de colaborador social debidamente colegiado y registrado.
d. Por medio de mandatario verbal.

397. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado

ante el órgano administrativo competente:

a. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario.
b. Para solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos.
c. Para los actos de mero trámite.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

398. Según el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria, se presente por medios telemáticos cualquier documento ante la Administración Tributaria:

a. El presentador actuará con la representación que sea necesaria en cada caso.
b. El presentador habrá de acreditar dicha representación.
c. El sujeto pasivo habrá de acreditar dicha representación.
d. La Administración Tributaria en cada actuación habrá de verificar la representación.

399. Según el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un representante con domicilio en territorio español cuando:

a. No operen en dicho territorio a través de un establecimiento permanente.
b. Así lo solicite el interesado y así lo comunique a la Administración.
c. Por las características de la operación o actividad realizada o por la cuantía de la renta obtenida, así lo requiera la Administración Tributaria.
d. Sean ciudadanos de la Unión Europea.

400. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración Tributaria:

a. El domicilio fiscal será, en todo caso, para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual.
b. Para las personas físicas el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección sus actividades económicas.
c. Para las personas físicas el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas.
d. Para las personas físicas será posible que el domicilio fiscal sea cualquiera de los anteriores.

401. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación con el domicilio fiscal:

a. Cada Administración deberá comprobar bianualmente el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa.
b. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo

a la Administración Tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente.
c. El cambio de domicilio fiscal producirá efectos frente a la Administración Tributaria desde que se inscriba dicho cambio en el registro oficial pertinente, según se trate de persona física o jurídica.
d. Cada Administración deberá rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa.

402. Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el domicilio fiscal de las personas o entidades no residentes en España:

a. Se determinará en virtud de la comunicación por el interesado a la Administración Tributaria.
b. Se determinará por las disposiciones de la Unión Europea para los ciudadanos de sus Estados miembros.
c. Será establecida mediante acuerdo del obligado tributario y de la administración competente.
d. Se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo.

Tema 16. Los procedimientos administrativos en materia tributaria: Fases. Obligación de resolver y plazos de resolución. La Prueba. Notificaciones. La denuncia pública. Potestades y funciones de comprobación e investigación. Las liquidaciones tributarias.

403. La actuación de las Administraciones Tributarias se desarrolla a través de procedimientos administrativos, esto implica:

a. Una secuencia ordenada de actos en la que cada uno de ellos trae causa del anterior y es preparatorio del siguiente.
b. Un conjunto ordenado de trámites hasta llegar al acto final resolutorio del procedimiento.
c. Que son procedimientos eventuales, ya que no se dan en todos en todos los casos, y fungibles, pues pueden variar su estructura para cada caso.
d. Las tres opciones son correctas.

404. Según el artículo 97 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán:

a. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo y supletoriamente, por la Ley 39/2015.
b. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y por la Ley 40/2015.
c. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y supletoriamente por la Ley 39/1992.
d. Por las normas de dicha ley y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y supletoriamente por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

405. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos podrán iniciarse:

a. De oficio o a instancia del obligado tributario, mediante cualquier medio previsto en la normativa tributaria.
b. A instancia de parte, de oficio o por indicación de otro organismo administrativo interesado previsto en la normativa tributaria.
c. De oficio o a petición de otro órgano administrativo interesado competente en el expedienta a iniciar.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

406. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, en todo caso:

a. El nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.
b. El nombre y apellidos y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.
c. El nombre y apellidos o razón social y domicilio fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

407. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria podrá aprobar para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios:

a. Sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
b. Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
c. Modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios.
d. Formularios, modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

408. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios:

a. La Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
b. La Administración no podrá requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
c. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido que obren en los archivos administrativos podrá ser solicitado por el obligado tributario y por los que justifiquen interés legítimo en el procedimiento.
d. En los procedimientos tributarios será necesaria la apertura de un período de prueba y la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.

409. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios:

a. Pueden rehusar la presentación de los documentos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante.
b. Pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria.
c. Pueden rehusar la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

410. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las comunicaciones son:

a. Los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad.
b. Los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones.
c. Los informes preceptivos conforme al ordenamiento jurídico que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones Públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

411. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria regula tres grandes tipos de procedimientos de acuerdo a una distribución funcional de los mismos:

a. Los procedimientos de gestión y liquidación de los tributos, el procedimiento sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa.
b. Los procedimientos de aplicación de los tributos, el procedimiento sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa.
c. Los procedimientos de gestión de los tributos, el procedimiento inspector y sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa.
d. Los procedimientos de gestión de los tributos, el procedimiento investigador y sancionador y los procedimientos de revisión y de apremio en vía administrativa.

412. Los procedimientos de aplicación de los tributos, regulados en el Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, vienen referidos a la efectividad del tributo, se concretan en:

a. Liquidación, recaudación y, en su caso, devolución.
b. Investigación, liquidación y recaudación.
c. Gestión, inspección y recaudación.
d. Verificación, certificación y recaudación.

413. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución:

a. Cuando se suscriban actas con acuerdo.
b. Cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta.
c. Cuando expresamente se solicite por los interesados.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

414. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán:

a. Presentar por medio de representante sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
b. Presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
c. Presentar por medio de colaboradores sociales sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
d. Presentar por correo certificado sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

415. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta:

a. Que no podrá tener una duración inferior a 15 días ni superior a 20.
b. Que no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.
c. Que tendrá una duración de 15 días.
d. Que tendrá una duración de 20 días.

416. Según el artículo 100 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pondrá fin a los procedimientos tributarios:

a. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud y la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas.
b. La caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.
c. La prescripción, el acuerdo de mediación o arbitraje o el cumplimiento de la obligación.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

417. Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria está obligada:

a. A resolver expresamente de oficio en los procedimientos en los que se produzca la caducidad o la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento.
b. A resolver expresa y motivadamente de oficio en los procedimientos en los que se produzca la renuncia o el desistimiento de los interesados.
c. A resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

418. Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Administración Tributaria serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho:

a. Los actos de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos.
b. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos.
c. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos.
d. Los actos renuncia, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos.

419. Según el artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos de aplicación de los tributos:

a. Quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
b. La unidad de gestión tributaria cumplirá su deber de probar si designa de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria.
c. La factura constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que, si la Administración cuestiona su efectividad, le corresponde aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.
d. Las tres opciones son correctas.

420. Según los artículos 107 y 108 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a la prueba:

a. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización en todo caso.
b. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.
c. Las presunciones establecidas por las normas tributarias no pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto con el consentimiento de la unidad tributaria que practicó la diligencia.
d. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos privados establecida en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

421. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la notificación se practicará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

a. En el domicilio fiscal del obligado tributario en todo caso.
b. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante.
c. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.
d. En el domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante en todo caso.

422. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse:

a. En el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante.
b. En el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.
c. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

423. Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrán poner en conocimiento de la Administración Tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos:
a. Mediante denuncia anónima.
b. Mediante denuncia pública.
c. Mediante comunicación anónima.
d. Las tres opciones son válidas.

424. Según el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el denunciante:

a. Será considerado interesado en las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia.
b. Se le informará del resultado de las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia.
c. Estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

425. Según el artículo 115 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración Tributaria podrá comprobar e investigar:

a. Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables, aunque afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción.
b. Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables siempre que no hubiesen prescrito.

c. Los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y negocios determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables siempre que no hubiesen prescrito.
d. Cualesquiera hechos, actos, elementos y actividades relacionadas con la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables, aunque afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción.

426. Respecto a las liquidaciones tributarias, según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que:

a. Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la cantidad que resulte a devolver de acuerdo con la normativa tributaria.
b. Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria.
c. Son actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la cantidad que corresponda compensar de acuerdo con la normativa tributaria.
d. Todas las opciones son correctas.

427. Respecto a las liquidaciones tributarias según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que:

a. La Administración Tributaria estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.
b. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.
c. Son liquidaciones provisionales aquellas en las que proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación tributaria.
d. Las dos últimas opciones son correctas.

Tema 17. Extinción de la deuda tributaria. El pago o cumplimiento: Legitimación, momento, plazos, imputación y consignación. Medios y canales de pago. Otras formas de extinción: La prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia. Garantías de la deuda tributaria.

428. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias podrán extinguirse:

a. Por pago, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios previstos en las leyes.
b. Por pago, caducidad, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios reglamentariamente previstos.
c. Por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes.
d. Por pago, prescripción, caducidad o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes.

429. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el efecto liberatorio de la extinción de la deuda tributaria afectará:

a. Exclusivamente al importe pagado, compensado, deducido o condonado.
b. Principalmente al importe pagado, compensado, deducido o condonado.
c. A la totalidad de la deuda reconocida por el obligado tributario.
d. Al importe de la deuda consignado por la Administración Tributaria en la liquidación definitiva.

430. Según el artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a las formas de pago:

a. El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, mediante efectos timbrados o mediante giro postal certificado.
b. El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, mediante efectos timbrados o en especie cuando se determine expresamente.
c. El pago de la deuda tributaria se efectuará en cualquier caso utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
d. Las últimas opciones son correctas.

431. Según el artículo 61 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria:

a. Cuando se haya domiciliado el pago del importe por el obligado tributario.
b. Cuando se haya realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión.
c. Cuando se libre la orden de pago por el obligado tributario o su representante.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

432. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

a. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el último día hábil del mes en curso, pudiendo solicitar el obligado tributario una prórroga de siete días.
c. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior.
d. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta los veinte días posteriores a la recepción de la notificación.

433. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse:

a. En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de diciembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b. En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 30 de octubre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
c. En el período comprendido entre el día quince de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente para los pagos domiciliados.
d. En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

434. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados:

a. Se pagarán en el momento en el que se reciba la notificación de la Administración Tributaria competente.
b. Se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica.
c. Se pagarán en el momento de la recepción de la liquidación pertinente.
d. Se abonarán cuando la Administración Tributaria competente valide el importe de la liquidación.

435. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:

a. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
c. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el último día hábil del mes en curso.
d. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta veinte días después de la recepción de la notificación.

436. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías cuando se compruebe que por la misma operación:

a. Se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria.
b. Cuando se ha soportado la repercusión de otro impuesto.
c. Siempre que el pago o la repercusión fuera incompatible con la deuda exigida y el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente.
d. Todas las opciones son correctas.

437. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el fraccionamiento supone:

a. Un aplazamiento con la especialidad de realizarse el pago en varios plazos.
b. La obligación ineludible de realizar pagos parciales.
c. Un diferimiento en el momento del pago referido al importe total de la deuda.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

438. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias:

a. Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario.
b. Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período ejecutivo.
c. Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario o ejecutivo.
d. Podrán fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario.

439. Según el artículo 63 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario, y no pudieran extinguirse totalmente, en relación a la imputación de pagos:

a. Si no pudieran extinguirse totalmente, la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda más antigua.
b. Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias a favor de una Administración y de otras entidades de Derecho público dependientes de la misma, tendrán preferencia para su cobro estas últimas.
c. Si no pudieran extinguirse totalmente la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda más reciente.
d. Si no pudieran extinguirse totalmente la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda de mayor importe.

440. Según el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los plazos de prescripción, establece que no prescriben a los cuatro años los siguientes derechos:

a. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación.
b. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
c. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
d. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

441. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación comenzará a contarse:

a. Desde el día en que comience el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
b. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
c. Desde el día en que tenga lugar el hecho imponible del tributo.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

442. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas comenzará a contarse:

a. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario.
b. Desde el día en que comience el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
c. Desde el día en que tenga lugar el requerimiento de pago por la Administración Tributaria competente.
d. Desde el día siguiente a la notificación de la última actuación recaudatoria practicada.

443. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el

plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías comenzará a contarse:

a. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo.
b. Desde el día siguiente a la fecha de la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.
c. Desde el día siguiente a aquel en que se requirió el pago del ingreso indebido.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

444. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías comenzará a contarse:

a. Desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
b. Desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.
c. Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

445. Según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación se interrumpe:

a. Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento del obligado tributario.
b. Por cualquier acción de la Administración Tributaria conducente a la investigación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria.
c. Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

446. En relación a la compensación, el artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, admite la posibilidad de que:

a. Las deudas tributarias se extingan total o parcialmente por compensación.
b. La compensación habrá de aplicarse, en todo caso, de oficio.
c. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo previa solicitud de este último.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

447. Según el artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los efectos de la prescripción:

a. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.
b. Aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria excepto a los los responsables.
c. Se aplicará de oficio, excepto en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria.
d. Ha de ser invocada o excepcionada por el obligado tributario.

448. Según el artículo 75 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias:

a. Sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.
b. La condonación de las obligaciones es contraria al principio de la indisponibilidad de la Administración de los créditos tributarios de que es acreedora.
c. La condonación de las obligaciones tributarias será establecida reglamentariamente en los casos excepcionales acordados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda.
d. Las dos últimas opciones son correctas.

449. Según el artículo 76 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios:

a. Se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial.
b. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago.
c. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

450. Según el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria:

a. Los derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor.
b. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.
c. Los bienes transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

451. Según el artículo 78 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente:

a. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales si estos no han inscrito sus derechos.
b. El Estado y las Comunidades Autónomas, aunque éstos hayan inscrito sus derechos.
c. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales aunque éstos hayan inscrito sus derechos.
d. Las Entidades Locales, hayan inscrito o no sus derechos.

452. Según el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Hacienda Pública:

a. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores.
b. Tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos respecto a otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real inscrito con anterioridad.
c. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto las obligaciones derivadas de relaciones paternofiliales derivadas de procedimientos judiciales.
d. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto los créditos derivados de obligaciones incumplidas con la Seguridad Social.

Tema 18. El procedimiento de recaudación en período voluntario: Iniciación y conclusión. Las entidades colaboradoras en la recaudación. Recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.

453. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

a. Determinados impuestos tienen un plazo de ingreso voluntario.
b. Todas las deudas tributarias tienen un plazo de ingreso voluntario que depende del tributo del que se trate en cada caso.
c. Se deberán pagar entre el uno de septiembre y el 20 de noviembre.
d. Las dos últimas opciones son correctas.

454. En los tributos con plazos específicos que se notifican de forma periódica y colectiva, esencialmente regulados en la Ley de Hacienda Locales:

a. El plazo para el pago será el que determine expresamente su normativa reguladora.
b. De no existir estipulación expresa se deberán pagar entre el uno de septiembre y el 20 de noviembre.
c. Se pueden pagar mediante el ingreso correspondiente en los treinta días hábiles siguientes a la finalización del ejercicio fiscal en el que la deuda se devengó.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

455. Las deudas tributarias que hayan de pagarse mediante efectos timbrados deben satisfacerse:

a. A los cinco días de ser requeridos por la Administración Tributaria competente.
b. Como regla general, en el momento en que se produce el hecho imponible.
c. Cuando se notifique la liquidación definitiva.
d. Al cumplimentar la autoliquidación pertinente.

456. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

a. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 30 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
c. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
d. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

457. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente a solicitud del obligado tributario:

a. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver.
b. Se indica que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende.
c. Si el obligado tributario aporta garantía suficiente.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

458. Según el artículo 62.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe de la deuda suspendida:

a. Podrá ser superior en un 5% a la devolución solicitada.
b. Podrá ser superior a la devolución solicitada previa ampliación de las garantías aportadas.
c. No podrá ser superior a la devolución solicitada.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

459. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con la deuda suspendida:

a. Quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda de la devolución reconocida.
b. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución.
c. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución una vez aprobada la liquidación por la Administración Tributaria competente.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

460. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías, cuando se compruebe:

a. Que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria.
b. Que se ha soportado la repercusión de otro impuesto.
c. Que el pago o la repercusión fueran incompatible con la deuda exigida y el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente.
d. Las tres opciones son correctas.

461. Según el artículo 160 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la recaudación tributaria consiste:

a. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias en período voluntario.

b. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias en período voluntario o en período ejecutivo.
c. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias en período ejecutivo.
d. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias en vía de apremio.

462. El artículo 62 de la Ley General Tributaria contempla de forma detallada los plazos para el pago de la deuda tributaria, las deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas de operaciones de comercio exterior:

a. Deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa.
b. Podrán realizarse ingresos directamente en las cajas de las aduanas.
c. Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas en cuentas abiertas en entidades de crédito.
d. Las tres opciones son correctas.

463. Según el artículo 2 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, la gestión recaudatoria de la Hacienda pública consiste en:

a. El ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas tributarias que deban satisfacer los obligados al pago.
b. El ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las sanciones tributarias que deban satisfacer los obligados al pago.
c. El ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de los demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago.
d. Todas las opciones son correctas.

464. La iniciación del período voluntario puede producirse:

a. Por la notificación al sujeto pasivo una liquidación practicada por la Administración Tributaria competente.
b. Por la apertura del plazo de presentación de autoliquidaciones en los casos legalmente previstos.
c. A solicitud del obligado tributario en los casos legalmente previstos.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

465. Según el artículo 18 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al pago podrán ingresar en las entidades colaboradoras las siguientes deudas:

a. Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos reglamentariamente establecidos, y las realizadas por vía telemática si tienen cuentas abiertas en dichas entidades.
b. Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.

c. Cualesquiera otras en relación a las cuales el Ministro de Economía y Hacienda haya establecido que el ingreso ha de realizarse con carácter obligatorio en las entidades de crédito que presten el servicio de caja.
d. Todas las opciones son correctas.

466. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación al procedimiento de ingreso a través de entidades colaboradoras en la recaudación:

a. Los ingresos se realizarán en cuentas restringidas abiertas en las entidades colaboradoras.
b. La denominación y funcionamiento de estas cuentas serán establecidos mediante convenios con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
c. Las entidades colaboradoras tramitarán los ingresos que deban realizarse obligatoriamente en las entidades de crédito que presten el servicio de caja.
d. La prestación del servicio de colaboración será retribuida, en todo caso, por el obligado tributario.

467. Según el artículo 9 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, sólo podrán actuar como entidades que presten el servicio de caja o como entidades colaboradoras:

a. Los bancos, las cajas de ahorro y las entidades financieras.
b. Las cajas de ahorros, las entidades financieras y las cooperativas de créditos.
c. Las entidades financieras y las cooperativas de créditos.
d. Los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito.

468. Según el artículo 12 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, los ingresos podrán realizarse:

a. En la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
b. En las entidades de crédito que presten el servicio de caja a las que se refiere o en las entidades colaboradoras.
c. En las oficinas de Correos y Telégrafos y en los registros generales de las entidades tributarias competentes.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

469. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a los ingresos en las entidades colaboradoras:

a. Las entidades colaboradoras únicamente admitirán el dinero de curso legal como medio de pago.
b. Las entidades colaboradoras admitirán, en todo caso, el dinero de curso legal como medio de pago.
c. Las entidades colaboradoras podrán aceptar cualquier otro medio de pago habitual en el tráfico bancario previa notificación a la entidad recaudadora competente.
d. Las entidades colaboradoras establecerán y publicitarán los medios de pago que

admiten en relación con cada impuesto que recauden.

470. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los gastos que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal:

a. Correrán por cuenta de la Administración.
b. Correrán por cuenta de la entidad colaboradora.
c. Correrán por cuenta del obligado tributario.
d. En ningún caso correrán por cuenta de la Administración.

471. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las entidades colaboradoras admitirán los ingresos:

a. Los días que sean laborables para éstas durante el horario de caja.
b. Los días hábiles durante el horario de caja.
c. Los días previstos en el calendario fiscal establecido preceptivamente en la Ley de Presupuestos del Estado.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

472. Según el artículo 19 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la entidad colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro, debe comprobar:

a. La identificación del obligado al pago y el importe a ingresar, el concepto y naturaleza del mismo.
b. La identificación del obligado al pago y del importe a ingresar.
c. La veracidad de los datos consignados, la identidad de quien realiza el ingreso y el importe a ingresar.
d. La pertinencia del pago, la identificación del obligado tributario y el importe del mismo.

473. Según el artículo 23 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá realizarse:

a. Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de los recursos o a través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del servicio.
b. Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de los recursos o por vía telemática.
c. A través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del servicio.
d. Por vía telemática.

474. Según el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los anuncios de cobranza relativos a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva se llevarán a efecto:

a. Mediante edictos en el boletín oficial que corresponda y en las oficinas de los

Ayuntamientos afectados.
b. Mediante edictos en el medio de difusión pertinente y en las oficinas de los Ayuntamientos afectados.
c. Mediante la inserción de anuncios en los principales medios de difusión del municipio y mediante notificación a los interesados.
d. Mediante la inserción de anuncios en los principales medios de difusión del municipio y mediante notificación telemática a los interesados.

475. El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por:

a. Notificaciones individuales realizadas conforme a las exigencias de las normas que rigen los procedimientos administrativos.
b. Recibos remitidos por correo ordinario que se remiten al obligado tributario una vez abierto el período de pago.
c. Notificaciones por vía telemática.
d. Todas las opciones son correctas.

476. Según el artículo 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas a las que se refiere esta sección en cuentas abiertas en entidades de crédito. Para ello:

a. Deberán comunicarlo al órgano de recaudación correspondiente al menos tres meses antes del comienzo del periodo de cobro.
b. Deberán comunicarlo al órgano de recaudación correspondiente al menos dos meses antes del comienzo del periodo de cobro.
c. Deberán comunicarlo por vía telemática al órgano de recaudación correspondiente al menos un mes antes del comienzo del periodo de cobro.
d. Deberán comunicarlo por conducto certificado al órgano de recaudación correspondiente treinta días antes del comienzo del periodo de cobro.

477. Según el artículo 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las domiciliaciones tendrán validez:

a. Para el período de cobro para el que se han solicitado.
b. Para el ejercicio fiscal para el que se han solicitado.
c. Para el periodo que se haya establecido por la Administración Tributaria competente para cada tributo.
d. Por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la entidad de crédito o invalidadas por la Administración.

Tema 19. La recaudación en período ejecutivo. Inicio. Efectos. Recargos del periodo ejecutivo. Intereses de demora.

478. Según el artículo 58 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago de la deuda tributaria comprenderá:

a. La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos correspondientes al período.
b. La cuota a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta, el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los del período ejecutivo o los exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes públicos.
c. La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos correspondientes al período y las multas coercitivas pertinentes.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

479. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en período ejecutivo habrá de llevarse a efecto:

a. Cuando finalice el periodo de pago voluntario.
b. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio.
c. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio en los plazos legalmente estipulados para ello.
d. Las dos primeras opciones son válidas.

480. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez iniciado el período ejecutivo el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:

a. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente
c. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día quince del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
d. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

481. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantía y a solicitud de éste:

a. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a compensar.
b. Si el obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver.
c. Si el obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a compensar.
d. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver o una comunicación de datos, con indicación de que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende.

482. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, impedirá el inicio del período ejecutivo:

a. La presentación de una solicitud de aplazamiento de pago en período voluntario.
b. La presentación de una solicitud de fraccionamiento de pago en período voluntario.
c. La presentación de una solicitud de suspensión total o parcial de pago en período voluntario.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

483. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo, podemos afirmar:

a. Podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
b. La Administración Tributaria no podrá iniciar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento.
c. La Administración Tributaria no podrá iniciar el procedimiento de apremio durante la tramitación del fraccionamiento.
d. La Administración Tributaria no podrá continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento.

484. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados:

a. Hasta la notificación de la resolución de admisión a trámite del aplazamiento o fraccionamiento.
b. Hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.
c. Hasta la notificación de la resolución de concesión del aplazamiento o fraccionamiento.
d. Hasta la notificación de la resolución de medidas cautelares acordadas para la admisión del aplazamiento o fraccionamiento solicitado.

485. Según el artículo 160 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la recaudación tributaria consiste:

a. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la liquidación y contabilización de las deudas tributarias.
b. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la compensación y cobro de las deudas tributarias
c. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes a la regularización de las deudas tributarias
d. En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias

486. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el período ejecutivo se inicia en el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria:

a. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que en la notificación de la liquidación realizada entre los días uno y 15 de cada mes, sería el siguiente al día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que en la notificación de la liquidación realizada entre los días 16 y último de cada mes, sería el siguiente al día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil.
c. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que, en el caso de impuestos locales, será el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

487. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el período ejecutivo se inicia en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso:

a. A los diez días de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso.
b. Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso.
c. A los cinco días de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso.
d. A los quince días de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso.

488. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el período ejecutivo se inicia en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación, cuando el período para efectuar el ingreso ya hubiere concluido:

a. El día siguiente a la presentación de la autoliquidación.
b. A los diez días de la presentación de la autoliquidación.
c. A los cinco días de la presentación de la autoliquidación.
d. A los quince días de la presentación de la autoliquidación.

489. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, impedirá el inicio del período ejecutivo:

a. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario.
b. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción hasta que sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.
c. El inicio de un procedimiento de consulta escrita y pertinente sobre el objeto de la deuda o liquidación hasta su notificación al obligado tributario.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

490. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, iniciado el período ejecutivo, la Administración Tributaria:

a. Efectuará la recaudación de las deudas reconocidas por el obligado por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
b. Efectuará la recaudación de las deudas liquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
c. Efectuará la recaudación de las deudas liquidadas y autoliquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
d. Efectuará la recaudación de las deudas liquidas, vencidas y exigibles por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.

491. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el inicio del período ejecutivo determinará:

a. La exigencia de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
b. La exigencia de las costas del procedimiento ejecutivo y, en su caso, de los intereses de demora.
c. La exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
d. La exigencia de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de los intereses de demora.

492. Según el artículo 162 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para asegurar o efectuar el cobro de la deuda tributaria, los funcionarios que desarrollen funciones de recaudación:

a. Podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios.
b. Procederán al examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes y correspondencia con transcendencia tributaria.
c. Procederán al examen de bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas.

d. Todas las opciones son correctas.

493. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora es:

a. Una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores.
b. Una penalización que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores.
c. Una compensación que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores.
d. Una indemnización que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores.

494. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora se exigirá:

a. Como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo.
b. Como consecuencia de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria.
c. Como consecuencia del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria.
d. Todas las opciones son correctas.

495. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la exigencia del interés de demora tributario:

a. Requiere la previa intimación de la Administración.
b. Requiere la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.
c. No requiere la previa intimación de la Administración.
d. Requiere notificación del importe del recargo al obligado tributario al mes del vencimiento de la deuda tributaria que lo genera.

496. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora no podrá exigirse:

a. Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración sin previa notificación al obligado
b. Cuando se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido.
c. Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente.
d. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua, salvo que dicha normativa establezca otra cosa.

497. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora podrá exigirse:
a. Cuando el obligado tributario lleve a efecto la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.
b. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua.
c. Cuando se suspenda la ejecución del acto previa intimación de la Administración.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

498. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente, el interés de demora será:

a. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento.
b. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 20 por ciento.
c. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 15 por ciento.
d. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 30 por ciento.

499. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible:

a. Será el interés legal más dos puntos.
b. Será el interés legal.
c. Será el interés legal más tres puntos.
d. Su importe podrá establecerse incrementando el interés legal de uno a tres puntos, según la gravedad del incumplimiento.

500. Según el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los recargos por declaración extemporánea son:

a. Prestaciones coercitivas que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo.
b. Prestaciones indemnizatorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo previo requerimiento de la Administración Tributaria.
c. Prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria.
d. Prestaciones compensatorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo.

501. Según el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si la presentación de la autoliquidación o declaración extemporánea se efectúa dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso:

a. El recargo será del cinco, diez o quince por ciento, respectivamente.
b. El recargo será del tres, seis y nueve por ciento, respectivamente.
c. El recargo será del dos, cuatro o seis por ciento respectivamente.
d. Ninguna de las opciones es correcta.

502. Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los recargos del período ejecutivo pueden ser:

a. Recargo ejecutivo, recargo de apremio ordinario y recargo de apremio especial.
b. Recargo ejecutivo, recargo de apremio simplificado y recargo de apremio agravado.
c. Recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario.
d. Recargo ejecutivo simple, recargo de apremio continuado y recargo de apremio agravado.

503. Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el recargo ejecutivo se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio, y su importe será:

a. Del cuatro por ciento
b. Del cinco por ciento.
c. Del ocho por ciento.
d. Del seis por ciento.

504. Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el recargo de apremio ordinario es compatible:

a. Con los intereses de demora.
b. Con el resto de los recargos regulados en dicha ley.
c. Con las multas coercitivas que proceda imponer.
d. Con las costas del procedimiento de apremio.

Tema 20. El procedimiento de apremio: Características, concurrencia y suspensión del procedimiento. La providencia de apremio: Concepto, motivos de impugnación, plazos de ingreso. Ejecución de garantías.

505. El procedimiento de apremio

a. Es aquel acto de ejecución forzosa a través del cual la Administración, con apoyo del título ejecutivo pertinente, procede a la realización efectiva de su crédito.
b. Es aquel acto de la Administración que procede a la realización efectiva de su crédito de Derecho público en virtud de la providencia de apremio.
c. Es la realización efectiva del crédito de Derecho público a favor de la Administración Tributaria mediante la ejecución individualizada sobre el patrimonio del deudor.
d. Todas las opciones son correctas.

506. El comienzo del periodo ejecutivo:

a. Constituye el presupuesto temporal para la iniciación del procedimiento de apremio.
b. Constituye el presupuesto procesal para la iniciación del procedimiento de apremio.
c. Constituye, su notificación, un elemento necesario de la providencia de apremio.
d. Las tres opciones son correctas.

507. Los recargos del período ejecutivo:

a. Se devengan con el inicio del período ejecutivo.
b. Son el recargo ejecutivo, el recargo reducido y el recargo ordinario.
c. Son el recargo ejecutivo del 15%, el recargo reducido del 5 % y el recargo ordinario del 10 %.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

508. El recargo ejecutivo se aplica:

a. Una vez iniciado el período ejecutivo y antes de iniciarse el procedimiento de apremio.
b. Cuando el deudor, de forma espontánea, decide satisfacer la deuda tributaria no pagada en período voluntario.
c. Cuando el deudor paga de forma extemporánea.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

509. Según el artículo 163 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el procedimiento de apremio:

a. Es de carácter administrativo y fiscal, la competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
b. Es exclusivamente administrativo, la competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración Tributaria.
c. Es exclusivamente tributario, la competencia para entender del mismo corresponde a la Administración Tributaria.

d. Ninguna de las opciones es correcta.

510. Según la Ley General Tributaria, las principales características del procedimiento de apremio tributario son las siguientes:

a. En caso de que concurra con otros procedimientos singulares de ejecución será preferente aunque el embargo que implica el procedimiento de apremio no sea el más antiguo.
b. Se desarrolla dentro del período ejecutivo y en caso de que concurra con otros procedimientos ejecutivos, el procedimiento de apremio se acumulará a los judiciales y a los de cualquier otro tipo.
c. Se ha de desarrollar dentro del período ejecutivo, todos sus trámites se inician e impulsan de oficio y es de carácter exclusivamente administrativo.
d. Si concurre con procedimientos concursales o universales de ejecución, el de apremio será preferente independientemente de la fecha en que se haya dictado la providencia de apremio.

511. Según el artículo 165 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el procedimiento de apremio no se suspenderá:

a. Cuando un tercero interponga tercería de mejor derecho.
b. Cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda.
c. Cuando el interesado demuestre que la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

512. Según el artículo 166 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la declaración de nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio:

a. No obsta a que se disponga la conservación de las no afectadas por la causa de la nulidad.
b. Implica la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de apremio.
c. Supondrá la nulidad de todas aquellas actuaciones sobre las que la Administración no declare motivadamente lo contrario.
d. Implica la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de apremio si no consta petición expresa del obligado tributario en sentido contrario.

513. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, el procedimiento de apremio se inicia:

a. De forma automática, una vez finalizado el período voluntario de pago.
b. Mediante la notificación de la Administración al deudor de la providencia de apremio, una vez finalizado el período voluntario de pago.
c. De forma automática, a los diez días de la finalización del período voluntario de pago.
d. A los diez días de la notificación de la providencia de apremio.

514. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, en la providencia de apremio:

a. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se establece ella cantidad total a ingresar.
b. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se procede al embargo de bienes.
c. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se le requiere para que efectúe el pago.
d. Se identifica al deudor y la deuda apremiada y se establece ella cantidad total a ingresar.

515. El sujeto pasivo u obligado al pago, también puede pagar después de recibir la notificación de la providencia de apremio. Si efectúa el pago en el plazo que le señala la providencia de apremio:

a. Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe de la deuda o recargo reducido.
b. Abonará el importe de la misma más el recargo del 20% del importe de la deuda, o recargo reducido.
c. Abonará el importe de la misma más el recargo del 15% del importe de la deuda, o recargo ordinario.
d. Abonará el importe de la misma más el recargo del 5% del importe de la deuda, o recargo reducido.

516. Si el sujeto pasivo u obligado al pago, no paga después de recibir la notificación de la providencia de apremio:

a. Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe de la deuda o recargo de apremio más los intereses de demora.
b. Abonará el importe de la misma más el recargo del 20% del importe de la deuda, recargo ordinario, más los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo, así como las costas del procedimiento.
c. Abonará el importe de la misma más el recargo del 15% del importe de la deuda, o recargo ordinario más las costas del procedimiento.
d. Abonará el importe de la misma más el recargo del 10% del importe de la deuda, o recargo ejecutivo más los intereses de demora, así como las costas del procedimiento.

517. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, se procederá al embargo de los bienes del obligado tributario si no efectuara el pago, advirtiéndose así en la providencia de apremio:

a. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 30 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
c. Si la notificación de la providencia se realiza entre los 15 y último de cada mes de cada

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 10 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
d. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día seis del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

518. Según el artículo 71 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, entre los extremos que se harán constar la notificación de la providencia de apremio no se alude:

a. Al lugar de ingreso de la deuda y del recargo y posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.
b. Al requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio.
c. A la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.
d. A la repercusión de costas del procedimiento e indicación expresa sobre la suspensión del mismo.

519. Según el artículo 70 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, entre los extremos que deberá contener la providencia de apremio no se alude a:

a. Los recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición.
b. El concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde.
c. La fecha de emisión de la providencia de apremio.
d. La liquidación del recargo del periodo ejecutivo.

520. Según el artículo 70 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, la providencia de apremio es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago y deberá contener:

a. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento.
b. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ordinario del 10 por ciento.
c. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ordinario del 15 por ciento.
d. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ejecutivo del 15 por ciento.

521. Según el artículo 72 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, las cantidades adeudadas devengarán interés de demora:

a. Desde la fecha de la providencia de apremio hasta la fecha de su ingreso.
b. Desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso.
c. Desde la fecha de la notificación de la providencia de apremio hasta la fecha de su ingreso.
d. Desde la finalización del periodo de pago voluntario del impuesto adeudado hasta la fecha de su ingreso.

522. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, una vez iniciado el procedimiento de apremio si la deuda tributaria estuviera garantizada:

a. La Administración procederá a ejecutar las garantías antes de embargar.
b. Finalizado el plazo recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria la Administración procederá a ejecutar las garantías.
c. La Administración procederá a un nuevo requerimiento expreso para que se efectúe el pago de la deuda.
d. Las dos primeras opciones son correctas.

523. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, si la deuda tributaria estuviera garantizada:

a. Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto.
b. Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada.
c. Se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio.
d. Todas las opciones son correctas.

524. Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes:

a. El recargo ejecutivo del 5%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora desde el período ejecutivo.
b. El recargo ejecutivo del 5%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de notificación de la providencia de apremio, con intereses de demora desde el período ejecutivo.
c. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora desde el período ejecutivo.
d. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de notificación de la providencia de apremio, con intereses de demora desde el período ejecutivo.

525. Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes:

a. El recargo ordinario ejecutivo del 15%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin intereses de demora desde el período ejecutivo.
b. El recargo de apremio reducido del 10%, cuando el ingreso de la deuda y del recargo se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin intereses de demora desde el período ejecutivo.
c. El recargo ordinario ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, con intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo.
d. El recargo ejecutivo del 15%, cuando el ingreso de la deuda se realiza antes de finalizar el plazo de las deudas apremiadas con intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo.

526. Los recargos que pueden resultar aplicables son los siguientes:

a. El recargo de apremio ordinario del 15%, una vez finalizado el plazo recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, el recargo es compatible con los intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo.
b. El recargo de apremio ordinario del 20%, una vez finalizado el plazo recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, el recargo es compatible con los intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo.
c. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza después de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, sin intereses de demora desde el período ejecutivo.
d. El recargo ejecutivo del 10%, cuando el ingreso de la deuda se realiza después de finalizar el plazo de las deudas apremiadas, con intereses de demora desde el período ejecutivo y costas del procedimiento.

527. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, los motivos de oposición a la providencia de apremio son tasados, entre ellos no se encuentra:

a. La extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b. La caducidad por inactividad de su titular durante un plazo de cuatro años.
c. La solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
d. La anulación de la liquidación.

528. Según el artículo 74 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda estuviese garantizada y resultase impagada, y la garantía consiste en aval, fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal:

a. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado.
b. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado.
c. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos y costas del

procedimiento que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado.
d. Se requerirá al garante el abono de la deuda, incluidos el recargo ordinario y las costas del procedimiento que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado.

529. La vía de apremio, o procedimiento de apremio:

a. Pretende la entrega directa de los bienes embargados a la Administración Tributaria para el pago del crédito que se ejecuta.
b. Es la última fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los bienes embargados, es obtener el dinero para hacer pago de la cantidad debida al ejecutante.
c. Es la fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los bienes embargados, es el cobro de recursos de naturaleza pública.
d. Todas las opciones son correctas.

RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO
C2 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1	a	51	a	101	d	151	a	201	c	251	a	301	d	351	b
2	b	52	b	102	b	152	c	202	a	252	a	302	a	352	d
3	d	53	a	103	c	153	a	203	b	253	d	303	a	353	d
4	a	54	a	104	d	154	a	204	c	254	d	304	b	354	a
5	c	55	d	105	b	155	d	205	a	255	a	305	d	355	c
6	a	56	a	106	d	156	a	206	a	256	a	306	a	356	a
7	c	57	a	107	c	157	a	207	b	257	b	307	b	357	d
8	d	58	a	108	a	158	d	208	c	258	d	308	b	358	a
9	b	59	b	109	b	159	b	209	a	259	c	309	c	359	b
10	c	60	b	110	c	160	d	210	b	260	c	310	d	360	c
11	b	61	c	111	b	161	d	211	d	261	c	311	a	361	a
12	d	62	c	112	d	162	a	212	a	262	d	312	a	362	b
13	d	63	c	113	d	163	a	213	b	263	c	313	a	363	c
14	d	64	a	114	d	164	c	214	c	264	c	314	b	364	d
15	d	65	a	115	d	165	d	215	b	265	d	315	d	365	a
16	b	66	c	116	a	166	d	216	c	266	b	316	a	366	b
17	c	67	a	117	b	167	c	217	c	267	c	317	b	367	c
18	a	68	a	118	d	168	a	218	d	268	c	318	a	368	d
19	c	69	b	119	b	169	d	219	b	269	d	319	c	369	c
20	a	70	a	120	b	170	a	220	a	270	a	320	d	370	a
21	c	71	c	121	a	171	d	221	c	271	a	321	b	371	c
22	a	72	d	122	c	172	b	222	a	272	a	322	b	372	a
23	d	73	d	123	d	173	a	223	d	273	a	323	b	373	b
24	a	74	c	124	b	174	d	224	a	274	b	324	c	374	d
25	b	75	a	125	d	175	d	225	b	275	a	325	d	375	b
26	a	76	b	126	a	176	b	226	a	276	a	326	a	376	a
27	c	77	c	127	d	177	b	227	a	277	b	327	d	377	d
28	d	78	a	128	d	178	c	228	d	278	b	328	a	378	d
29	d	79	c	129	b	179	d	229	a	279	c	329	a	379	d
30	d	80	a	130	a	180	d	230	c	280	d	330	a	380	a
31	a	81	d	131	a	181	b	231	a	281	d	331	d	381	c
32	b	82	a	132	a	182	d	232	d	282	b	332	c	382	a
33	a	83	b	133	b	183	b	233	d	283	a	333	c	383	b
34	c	84	d	134	c	184	d	234	a	284	d	334	a	384	d
35	d	85	c	135	c	185	b	235	c	285	b	335	c	385	d
36	a	86	a	136	a	186	d	236	d	286	d	336	b	386	b
37	a	87	b	137	b	187	d	237	b	287	a	337	b	387	c
38	d	88	d	138	a	188	d	238	d	288	d	338	c	388	a
39	a	89	c	139	c	189	d	239	a	289	a	339	c	389	d
40	c	90	d	140	d	190	b	240	a	290	a	340	c	390	c
41	d	91	a	141	d	191	c	241	b	291	a	341	d	391	d
42	a	92	b	142	c	192	a	242	c	292	b	342	a	392	d
43	b	93	a	143	a	193	c	243	d	293	d	343	d	393	c
44	d	94	d	144	c	194	d	244	c	294	c	344	c	394	b
45	b	95	b	145	c	195	c	245	a	295	d	345	d	395	d
46	d	96	d	146	c	196	b	246	d	296	d	346	c	396	a
47	d	97	a	147	a	197	d	247	d	297	b	347	d	397	d
48	c	98	c	148	b	198	a	248	a	298	a	348	a	398	a
49	a	99	c	149	a	199	b	249	d	299	d	349	c	399	c
50	b	100	b	150	d	200	c	250	d	300	a	350	b	400	d

RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO
C2 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

401	b	451	c	501	a
402	d	452	b	502	c
403	d	453	b	503	b
404	a	454	d	504	a
405	a	455	b	505	d
406	a	456	a	506	a
407	b	457	d	507	d
408	a	458	c	508	d
409	d	459	a	509	b
410	a	460	d	510	c
411	b	461	b	511	a
412	c	462	a	512	a
413	d	463	d	513	b
414	b	464	d	514	c
415	b	465	b	515	a
416	d	466	a	516	b
417	c	467	d	517	a
418	c	468	d	518	b
419	a	469	b	519	a
420	b	470	d	520	a
421	c	471	a	521	b
422	d	472	b	522	d
423	b	473	a	523	d
424	d	474	a	524	a
425	a	475	a	525	b
426	d	476	b	526	b
427	d	477	d	527	b
428	c	478	b	528	a
429	a	479	c	529	b
430	b	480	a		
431	b	481	d		
432	a	482	d		
433	d	483	a		
434	b	484	b		
435	a	485	d		
436	d	486	d		
437	d	487	b		
438	c	488	a		
439	a	489	d		
440	a	490	c		
441	b	491	c		
442	a	492	d		
443	a	493	a		
444	d	494	d		
445	c	495	c		
446	a	496	b		
447	a	497	b		
448	a	498	a		
449	d	499	b		
450	b	500	c		